

Ciudadanía y “nuevas democracias” en la América Latina del bicentenario

Gerardo Caetano

Los diversos relatos sobre los que se sustenta toda construcción democrática adquieren siempre una importancia central a la hora de evaluar sus fortalezas y sus capacidades para enfrentar las coyunturas adversas y de cambio. En América Latina, luego de la visión triunfalista que siguió a la caída de las dictaduras de la “seguridad nacional” en los ochenta, en las últimas décadas ha avanzado la preocupación sobre la “calidad” y la “baja intensidad” de nuestras democracias, sobre la creciente endeblez de sus instituciones y autoridades, las consecuencias de la miseria de millones de seres humanos, el también fuerte distanciamiento crítico de los ciudadanos respecto a los partidos y a los políticos. Este “malestar”, como

veremos más adelante, ha estado en la base de cambios y giros políticos muy visibles en la región, en especial en América del Sur durante los últimos diez años, muchos de ellos identificados con el impulso de procesos de reforma constitucional en verdad “refundacionales”¹.

Sobre el telón de fondo de este giro político, que en sí mismo no ha estado exento de turbulencias y conflictos, desde el 2008 se ha sumado al contexto general de la región el impacto a distintos niveles de la crisis económica y financiera internacional más importante desde los años treinta, lo que ha abonado aun más un cuadro de inestabilidad y temores acrecidos. En un contexto de fuertes transformaciones de toda índole, en un escenario de auténtica “encrucijada institucional”, como se verá en detalle más adelante, América Latina y el Caribe (ALC) recibieron el impacto de una severa crisis internacional, que venía a poner a prueba radical los cambios en curso a nivel del continente y la evolución de sus visiones acerca de la democracia y sus fundamentos. Focalizado principalmente sobre los escenarios políticos de los países de América del Sur² y con el centro analítico radicado en

1 Tal es el caso de los procesos de reforma constitucional de perfil “refundacional” impulsados por los gobiernos de Rafael Correa en Ecuador y de Evo Morales en Bolivia y, en un sentido que creemos por lo menos parcialmente diferente en sus orígenes y apuestas, por el gobierno de Hugo Chávez en Venezuela. En los dos primeros casos se postula y en ciertos aspectos se perfila —creemos— el proyecto de una refundación del Estado.

2 En el texto que sigue, sin dejar de remitir a la globalidad de los procesos políticos de América Latina, se priorizará la conside-

la interpelación de un proceso de cambio político muy fragmentado, sometido además a la prueba del impacto de una crisis global, el texto que sigue se propone examinar algunas pistas de reflexión para debatir en torno a nuevas formas de relación entre las construcciones democráticas y la vigencia de los derechos humanos en el continente latinoamericano

1. ALGUNAS PREMISAS CONCEPTUALES

El “derecho a tener derechos”: hacia una resignificación de la ciudadanía y de la democracia

Las discusiones sobre el concepto de ciudadanía y de democracia ocupan un lugar central en la agenda política y académica internacional. En América Latina, el replanteo de estas problemáticas se anudó en sus comienzos con los efectos aún persistentes de los procesos de transición a la democracia en América Latina y a los procesos de “reacción antipolítica” posteriores al fracaso estrepitoso de varios gobiernos que aplicaron de manera ortodoxa las recetas y postulados del llamado “neoliberalismo”, en boga en el continente durante buena parte de los noventa. Pero no cabe duda que, ya desde hace unos años, el fenómeno que impulsa más decisivamente este debate tiene que ver con el advenimiento en varios países del subcontinente sudamericano de gobiernos de izquierda

ración de los casos sudamericanos, conocidos más en profundidad por el autor.

o de signo más o menos *progresista* (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile hasta la asunción del nuevo gobierno presidido por Sebastián Piñera, en febrero de 2010, Paraguay, Uruguay, Venezuela) que, más allá de sus diferencias, en algunos casos notorias, han sido electos desde la esperanza de electorados que con claridad emitían una demanda de cambios profundos a distintos niveles.

La explosión de expectativas que acompañó y aun acompaña la sucesión de estos procesos, acrecentada por la coincidencia de un nutrido calendario electoral en la región en los próximos años, ha comenzado sin embargo a mitigar sus signos, en medio de señales de impaciencia o de desencanto ante los desempeños de los nuevos gobiernos. Más allá de los debates y de las críticas suscitadas acerca de los modelos aplicados en cada caso, de los perfiles por cierto diferentes de estas experiencias en curso, del debilitamiento de las novedades efectivamente concretadas ante las promesas emitidas durante los procesos preelectorales, resulta en verdad muy pesada la carga de exigencias, de derechos conculcados, cuya satisfacción no puede postergarse más en América Latina, el continente que se ha convertido en el más desigual del planeta. La expectativa de cambios y las realidades críticas que muestran las sociedades latinoamericanas vuelven absolutamente legítima la impaciencia de personas cuyo objetivo central podría muy bien sintetizarse en el objetivo de alcanzar, en algunos casos por primera vez, el “derecho a tener derechos”, en suma, convertirse

efectivamente en ciudadanos. A nuestro juicio, en este punto radica uno de los ejes fundamentales de la encrucijada institucional en sentido radical que atraviesa el subcontinente en lo que refiere al cruce entre democracia y derechos humanos en la actualidad.

A pesar de la alarma que han producido los acontecimientos vividos en Honduras y más recientemente en Ecuador, y a los perfiles autoritarios y confrontativos que exhiben los contextos políticos de distintos países latinoamericanos, no parece que se esté en los umbrales de una nueva era de dictaduras civil-militares al estilo de las de los años setenta. Sí, en cambio, las preocupaciones se centran en la deriva autoritaria de varios gobiernos, en los embates polarizadores de oposiciones irreductibles, en situaciones de confrontación profunda e inestable y en la emergencia de formatos de lo que más de un autor ha llamado “democracias de baja intensidad” o “democracias inciertas”. Desde luego, a una “democracia de baja intensidad” suele corresponder una “ciudadanía de baja intensidad”. Para que la ciudadanía activa opere como sustento de la democracia, no sólo es necesario que prevalezcan y se reproduzcan los valores democráticos (la libertad, la justicia, la tolerancia, el control del poder etc.) dentro de la comunidad, sino también que existan instituciones y reglas que permitan canalizar las demandas y propuestas de todos los ciudadanos, más allá de las diferencias sociales, étnicas, culturales o de otro tipo. Como se señala en el informe sobre el estado

de la democracia en América Latina, presentado por el PNUD hace ya varios años,

(...) aun en regiones donde el sistema legal tiene alcance, suele ser aplicado con sesgos discriminatorios contra varias minorías y también mayorías, tales como las mujeres, ciertas etnias y los pobres. Este sistema legal truncado genera lo que se ha llamado una ciudadanía de baja intensidad.³

Por definición, toda construcción democrática resulta inacabada e inacabable, vive en el cambio y a través del cambio. *Democratizar la democracia* constituye una tarea compleja que, con seguridad, demandará en el corto plazo reformas políticas, institucionales, electorales y sociales, pero que también deberá enfatizar en las dimensiones del poder tal como este se ejerce a diferentes niveles de la sociedad, en la satisfacción de demandas urgentes y concretas que refieren a los dramas de la pobreza y de la indigencia, en la educación, en principios democráticos de la ciudadanía, así como en la reafirmación y renovación de aspectos sustantivos de la cultura política. En otras palabras, a contramano de algunas propuestas simplistas, las demandas no se agotan en la apelación —a menudo retórica y sin correspondencia efectiva en la realidad— a mayores cauces de participación social, como vía de configuración de una “democracia participativa” que tendería paulatinamente a sustituir a la “democracia representativa” clásica, en una lógica de

3 PNUD, *La democracia en América Latina. Hacia una democracia de ciudadanas y ciudadanos*, Montevideo, PNUD, 2004, p. 63.

alternativa rígida sin posibilidades de síntesis superadoras. Por cierto que también se necesitan cambios estructurales más profundos y concretos, dentro de los cuales resulta necesario incluir propuestas (específicas y no meramente enunciativas) sobre cómo implementar una democracia inclusiva que a la vez pueda ser más efectivamente participativa y mejorar de modo simultáneo la calidad de las políticas públicas y de la representación que les otorga legitimidad.

Como es sabido, los debates académicos e ideológicos acerca de las definiciones y contenidos de la democracia, además de eternos, viven en estos tiempos una coyuntura especialmente agitada. Hoy enfrentamos un nuevo problema que ha dado en calificarse como el de la “confusión democrática”, bajo el rótulo prestigioso e incontrastable de la democracia se “hacen pasar” contenidos y prácticas muy poco democráticos, lo que redobla la exigencia de una mirada rigurosa y atenta, lejana por igual de la autocomplacencia conformista como del atajo catastrofista.

Teniendo en cuenta las dificultades y la indeseabilidad de cualquier posición absolutista en sociedades democráticas, a la hora de respetar la heterogeneidad interna que marca las complejas y plurales sociedades de la América Latina contemporánea, no podemos aspirar a respuestas concluyentes ni mucho menos a recetas aplicables a tan distintos contextos. Lo que sí podemos promover es la renovación de espacios de discusión político-

intelectual de proyección efectivamente regional, en los que, entre otras cuestiones, sea posible debatir de manera consistente y sin “dobletes” sobre ciertos “filtros conceptuales” ineludibles para la calificación de una democracia genuina, para precisar qué pertenece o no al ámbito de la política democrática, qué significa o no ser un ciudadano, cómo incorporar las dimensiones comunitarias y étnicas en las fraguas de sistemas políticos que legítimamente pueden reivindicar su condición plurinacional, analizar (en el respeto a la diversidad pero también desde el reconocimiento de la necesaria convergencia de principios irrenunciables) a qué democracia aspiramos, cómo es que han devenido las que son a través de los avatares de nuestras historias y cómo pueden llegar a ser.

Esta exigencia, renovada en el plano de las definiciones, incorpora ciertas dimensiones clásicas del debate, pero no cabe duda que hoy resulta imprescindible la asunción de retos nuevos, de exigencias de renovación insoslayables, de cara a las consecuencias políticas de muchos de los cambios de las sociedades contemporáneas. En ese sentido, los índices definidores y operativos de una democracia enfrentan actualmente desafíos importantes y en ciertos aspectos inéditos. Los indicadores tradicionales de autores clásicos como Robert Dahl (derecho al voto, derecho a ser elegido, derecho a la competencia política, elecciones libres y justas, libertad de asociación, libertad de expresión, existencia de fuentes

alternativas de información, solidez de las instituciones, sustentabilidad de las políticas públicas etc.), por ejemplo, en su aplicabilidad concreta a las condiciones de muchos países del planeta, enfrentan exigencias y dificultades renovadas. Lo mismo podría señalarse respecto a muchos otros autores e índices internacionales. Si resulta claro que en un continente como el de América Latina las definiciones procedimentales minimalistas (elecciones libres, sufragio universal, participación plena, libertades civiles) son insuficientes, la aplicabilidad y conceptualización de definiciones de democracia desde opciones ampliadas o maximalistas (que incorporan otros indicadores, como las exigencias de que los gobernantes electos tengan poder efectivo para gobernar o que existan ciertos niveles básicos de equidad socio-económica y altos niveles de participación popular) también se ven interpeladas desde diversas perspectivas. Adviértase, por ejemplo, la amplificación de los debates en torno a la idea de la justicia, desde tradiciones como la del pensamiento de John Rawls hasta desarrollos más contemporáneos como los que aparecen en los últimos trabajos de Amartya Sen,⁴ y podrá registrarse la envergadura de una rediscusión a fondo de la teoría democrática

4 Cfr., por ejemplo, Amartya Sen, *La idea de la Justicia*, Madrid, Taurus, 2010. La primera edición de este texto fundamental fue publicada en inglés bajo el título de *The Idea of Justice*, por el sello editorial Penguin Books en el 2009.

y de sus exigencias actuales en el campo de los derechos humanos y en el de la superación de la pobreza.

En lo que refiere a un marco de análisis más específicamente político, téngase en cuenta, por ejemplo, las dudas que podrían emerger de un cuadro de análisis que aplicara una regla de evaluación rigurosa e independiente sobre la situación de todos y cada uno de los actuales gobiernos de América Latina en general y de América del Sur en particular, en relación a factores como los que integran la reseña que sigue: manipulación de leyes electorales, usos clientelísticos, presiones y acciones directas promovidas desde los entornos gobernantes, convocatorias electorales de dudosa constitucionalidad y de uso plebiscitario a favor de los proyectos oficialistas, impulso de proyectos de reforma constitucional signados por la coyuntura, restricciones a medios de comunicación opositores o manipulación directa o indirecta de medios afines, escrutinios cuestionables en las instancias electorales, peso de poderes fácticos y extraterritoriales, circuitos ilegales o ilegítimos de financiamiento de las acciones partidarias, restricciones a los sistemas públicos y privados de contralor, presiones sobre los poderes judiciales, la consideración efectiva de los procedimientos legales e institucionales, entre otros que podrían agregarse.

Si a estos factores de perfil más “procedimental” le sumáramos otros con proyección más socio-política (distorsiones profundas en el ejercicio de los derechos humanos

a partir de niveles especialmente graves de pobreza, indigencia y desigualdad; impacto de la violencia a distintos niveles, como terrorismo de Estado, inseguridad ciudadana, narcotráfico, organizaciones delictivas de nivel macro; prácticas generalizadas de corrupción; desigualdades flagrantes en términos de poder; inseguridad jurídica etc.), con seguridad se podrá convenir en un panorama no homogéneo pero sí con preocupaciones severas y perfiles críticos respecto a la situación general y particular de las democracias del continente. En cualquier hipótesis, pocos podrán rechazar con fundamento que el impacto de la crisis global actual viene a profundizar los fundamentos de un imperativo histórico en la región: la necesidad de *democratizar la democracia*.

2. LA CRISIS Y SUS IMPACTOS ECONÓMICOS Y SOCIALES SOBRE AMÉRICA LATINA

A continuación, se pasará una rápida revista a algunos de los principales impactos económicos y sociales de la crisis global sobre América Latina. En numerosos trabajos recientes,⁵ se converge en la identificación de

5 Para fundamentar las consideraciones de este subcapítulo, se ha recurrido de manera particular a los siguientes trabajos: Francisco Rojas Aravena, “V Informe del Secretario. Documento preparado para el XXXII Consejo Superior de FLACSO”, 2009 (mimeo); Josette Altmann Borbón y Francisco Rojas Aravena, “Efectos sociales de la crisis financiera global en América Latina y el Caribe”, Secretaría General de FLACSO-Programa de Gobernabilidad y Convivencia Democrática en América Latina

varios de los principales indicadores que revelan el impacto profundo de la crisis global en las economías de América Latina y el Caribe:

- se ha producido una muy importante desaceleración de las exportaciones de los países de la región;
- este proceso se ha agudizado por la caída y la inestabilidad del precio internacional de las *commodities*, lo que ha agravado el déficit de nuestras relaciones de intercambio, en un contexto de creciente primarización de la matriz exportadora de las economías de la región;
- todo esto ha generado una caída considerable en el producto bruto interno (PBI) de los países de la región, provocando la desaceleración del crecimen-

y el Caribe-AECID, 2009 (cfr. www.flacso.org); Alicia Bárcena (Secretaría Ejecutiva de CEPAL), “Las economías de América Latina y el Caribe frente a la crisis internacional”, Montevideo, CEPAL, marzo de 2009 (Power Point); Tobías Roy (representante residente en Asunción del FMI), “La crisis económica mundial. Causas y el impacto sobre América Latina” (Power Point presentado en el seminario organizado por CEFIR sobre el tema “La región frente a la crisis mundial. Impactos y nuevas respuestas”, 8 y 9 de junio de 2009); José Rivera Banuet (secretario permanente del SELA), “América Latina y el Caribe ante la Crisis Económica Mundial” (Power Point presentado en el mismo seminario citado en la referencia anterior); SEGIB, *América Latina ante la crisis financiera internacional*, Montevideo, Centro de Información de la SEGIB, 2009; Felipe González (ed.), *Iberoamérica 2020. Retos ante la crisis*, Madrid, Fundación Carolina-Siglo XXI, 2009. Fueron también consultadas las páginas web de la OIT, de CEPAL, del Banco Mundial, de la OMC, del FMI, de ALADI, entre otras.

to primero y la recesión (con algunas excepciones) después, lo que resulta más inquietante pues interrumpe un ciclo de casi un lustro de incremento sostenido;

- ha caído en forma contundente el volumen de las remesas, con consecuencias muy severas para varios países del continente que tienen una fuerte dependencia de las mismas para sus respectivos equilibrios;
- se ha confirmado una disminución de los flujos de la inversión extranjera directa (IED), lo que profundiza la tendencia decreciente de la participación de ALC en los flujos de IED mundial;
- se han reducido los ingresos por la vía de los dividendos obtenidos por la actividad turística;
- se ha confirmado un esperable incremento en las dificultades para el acceso al crédito externo, producto del aumento de su costo y de la menor disponibilidad de financiamiento a nivel internacional;
- se ha consolidado la tendencia decreciente en la participación de América Latina en los flujos de ayuda oficial al desarrollo.

Los analistas coinciden en que el impacto de la crisis en el continente ha sido mayor al que se esperaba en el 2008, pero también señalan que los países de la región en términos generales se encuentran en mejores condiciones para enfrentar sus retos. A más de un año del comienzo más sensible de su impacto y a la luz de lo ocurrido en

ese tiempo, la mayoría de los analistas coincidía de todos modos hacia fines del 2009 que por el momento se trata de una “crisis bajo control”.⁶ Entre los fundamentos para el señalamiento de una región mejor preparada para enfrentar la crisis, se destacaban las siguientes aseveraciones más o menos consensuadas:

- las políticas macroeconómicas prudentes que en los años anteriores fueron aplicadas en la mayoría de los países del continente fortalecen la posición de la región ante los embates de la crisis;⁷
- han aumentado de manera consistente también las reservas internacionales netas;
- ello ha permitido incluso a varios gobiernos latinoamericanos aplicar políticas anticíclicas ante los

6 En esta dirección resulta ilustrativa la lectura de los textos que integran la sección “Tema Central” del último número de la revista *Nueva Sociedad*, precisamente bajo el título “Crisis bajo control. Efectos de la recesión mundial en América Latina” (cfr. *Nueva Sociedad*, n. 224, noviembre-diciembre 2009, Buenos Aires, Nueva Sociedad-FES, 2009, p. 47-199).

7 José Antonio Ocampo da una versión diferente respecto a este punto: “(...) debe matizarse considerablemente la percepción de que la fortaleza de la región proviene de un cambio importante en la política macroeconómica durante los años de auge, que se expresaría en la alta prioridad otorgada a los equilibrios macroeconómicos. En realidad, tanto la política fiscal como la evolución del saldo en la cuenta corriente de la balanza de pagos siguieron mostrando en general un comportamiento procíclico” (cfr. José Antonio Ocampo, “La crisis económica global: impactos e implicaciones para América Latina”, en *Nueva Sociedad*, n. 224, etc., ob. cit., p. 62).

giros de contracción, amortiguando algunos de sus efectos;

- la deuda pública ha disminuido en forma considerable en la región, en el marco de renegociaciones que proyectan una mejoría general de su tramitación de cara a los próximos años;
- esto se traduce —aunque con diferencias importantes entre países— en una relación favorable entre los montos de la deuda externa de corto plazo y el nivel de las reservas internacionales;
- los niveles de exposición externa de los sistemas financieros latinoamericanos en relación con los mercados internacionales resultan relativamente bajos;
- las tasas de inflación han permanecido, en general, estables en la región, favorecidas en algunos casos (Chile, Colombia, México, Perú, Brasil) por la adopción de políticas monetarias anticíclicas.

Pese a que estos mismos analistas advierten que esta situación de corte más bien favorable es promedial y que no todas las economías de la región comparten un mismo nivel de consistencia frente a la exposición externa, coinciden en destacar que, a pesar de que el ciclo expansivo del último lustro no volverá en el corto plazo, la mayoría de los países de ALC se encuentran mejor preparados que en el pasado para enfrentar los embates de esta crisis. Incluso alguno de ellos se atreve a pronosticar que la recuperación será más rápida en la región que en los países desarrollados. De todos modos, más allá

de estos señalamientos auspiciosos, los analistas también coinciden en el destaque de varios efectos sociales negativos, de envergadura considerable:

- se ha producido un aumento casi inmediato en las tasas de desempleo general, con niveles particularmente graves en relación al desempleo juvenil;
- a la caída del empleo se le suma un proceso de precarización y deterioro general en la calidad de los puestos de trabajo en el mercado laboral;
- los efectos de la crisis tienden a profundizar las asimetrías dentro del panorama social de ALC, tanto en lo que se relaciona con las diferencias notables entre países, así como entre sectores y actores distintos o en lo que hace a la desintegración territorial en el seno de las mismas sociedades nacionales;
- luego de un ciclo favorable en términos de políticas y estrategias eficaces en la reducción de la pobreza y de la indigencia, resultan predecibles crecientes dificultades para el mantenimiento de estos procesos virtuosos, con las múltiples consecuencias de una discontinuidad en este plano;
- también resulta previsible un incremento en los niveles de desigualdad (ya de por sí de los más altos del planeta), con una mayor concentración del ingreso y la ampliación de la brecha social;
- por su parte, la crisis tiende a afectar con más fuerza a los sectores históricamente más vulnerables en

ALC (mujeres, niños, jóvenes, pueblos originarios, afrodescendientes);

- resulta también previsible un incremento en los niveles de inseguridad ciudadana, de violencia y de conflictividad dentro de sociedades que ya presentan registros muy elevados y preocupantes en estos campos;
- el deterioro general de las condiciones sociales con seguridad incrementará el empuje de los fenómenos migratorios, tanto dentro como fuera de la región, en contextos nada favorables para un flujo “tranquilo” de este tipo de procesos a nivel internacional;
- en el mismo sentido, es de prever que se produzca una “sobredemanda” de políticas sociales activas en los reclamos al Estado, en un contexto de reducción del crecimiento económico que restringirá las disponibilidades para un gasto público incremental;
- es de esperar también un incremento de la conflictividad social en la perspectiva de la pugna entre sectores para evitar la caída de sus ingresos y condiciones de vida o para enfrentar un eventual incremento de la presión impositiva.

En este marco, otro centro del análisis ha apuntado a registrar cuáles han sido las principales orientaciones de las primeras respuestas que los gobiernos latinoamericanos han practicado frente a la crisis, a la vez que evaluar

algunas recomendaciones en esa dirección de cara a las estrategias para afrontar los requerimientos de una salida positiva de esta coyuntura desafiante. Algunas de las visiones más reiteradas y apoyadas en este campo figuran en la siguiente reseña:

- la mayoría de las posturas converge en reivindicar propuestas de diálogo y concertación social para pactar políticas con niveles de acuerdo importante, para orientar agendas concretas de reactivación económica y de retorno al crecimiento;
- se propone una reformulación importante del rol del Estado, en términos de una mayor regulación de la actividad económica y de los mercados de capitales, que ofrezca garantías de estabilidad sin asfixiar la rentabilidad privada, con la promoción de políticas inclusivas focalizadas en los sectores más vulnerables, en la defensa de una nueva red de producción sustentable y que agregue valor a los rubros exportables, con intersecciones consistentes con las redes del conocimiento y la innovación;
- en materia de políticas económicas, se tiende a promover políticas proactivas y anticíclicas, con sesgos redistributivos, dentro de las posibilidades efectivas de cada país, en especial en los campos de las políticas monetaria y financiera, fiscal, de rearticulación de políticas cambiarias y de comercio exterior, con estrategias específicas dirigidas a programas de vivienda, apoyo a pequeñas y media-

nas empresas (pymes), políticas sectoriales que interconecten con estímulos efectivos para la generación de empleo;

- en materia de políticas sociales, las mayores insistencias se dirigen a la necesidad de mantener los programas sociales de protección frente a la crisis, evitar por todos los medios posibles la contracción del gasto social (en especial en educación, salud y protección social a sectores vulnerables), recombinar con formas innovadoras medidas de corte universalista con políticas selectivas, desplegar nuevas políticas en materia migratoria que enfoquen el tema en su integralidad;
- se plantea un fuerte consenso respecto a que el impacto de la crisis en la región fortalece la centralidad de los procesos de integración regional, en procura de construir una agenda de concertación regional sobre temas estratégicos (infraestructura, energía, comercio, producción de alimentos, innovación en ciencia y tecnología, manejo integrado de recursos naturales, adopción de posiciones comunes en escenarios multilaterales), de administrar estrategias convergentes para acciones en materia de agenda externa acordada y proactiva, de administración de comercio intrarregional, de reformulación de la nueva arquitectura financiera internacional.

Lejos de minimizar los efectos de la crisis global sobre la región, pero también distantes de visiones catastrofistas,

muchos analistas tienden a coincidir en que, desde ALC, una respuesta certera y profunda ante esta coyuntura desafiante de la crisis global puede configurar una oportunidad para profundizar ciertas definiciones políticas estratégicas. Entre estas últimas destacan: la necesidad de renovar la voluntad política integracionista, bastante bloqueada en los últimos años; relanzar desde esa reafirmación integracionista estrategias audaces y viables en procura de iniciativas eficaces de reinserción internacional; la promoción de acuerdos nacionales y regionales en la perspectiva de activar en clave política nuevos proyectos de desarrollo con visión más integral y estratégica, menos dependientes de las oscilaciones de los mercados internacionales; renovar compromisos y coaliciones para confirmar políticas de reintegración social, con reducción de la pobreza y de la indigencia pero también con opciones vigorosas en materia de lógicas redistributivas y de equidad; la reafirmación más contundente del camino democrático como vía excluyente para garantizar la gobernabilidad y los cambios sociales de signo positivo de los últimos años.

Por cierto que en muchos de estos rubros abundan los argumentos y fundamentos para establecer visiones escépticas en relación a que el impacto de la crisis pueda configurarse en la coyuntura más idónea para cambiar estilos y prácticas que, en circunstancias más “normales”, se han orientado en perspectivas contrarias. Sin duda, los temas de los cambios, a nivel de las prácticas y modelos de

ciudadanía imperantes en la región, y la trayectoria de las visiones en torno al tema de la democracia y su vínculo directo con la vigencia de los derechos humanos configuran aspectos centrales para interpelar el posible impacto de la actual crisis global en relación a los escenarios previsibles de la gobernabilidad democrática en la América Latina de los próximos años. Si, como se pronostica, los efectos de la crisis por lo menos “desacelerarán” la efectividad de las políticas contra la pobreza y la indigencia en América Latina, sin duda que en ese núcleo radica el principal desafío para renovar la legitimación de las democracias y la optimización de sus resultados en el campo de los derechos humanos.

3. PERFILES DEL CUADRO POLÍTICO SOBRE EL QUE IMPACTA LA CRISIS EN AMÉRICA LATINA

Escenarios globales

Los países de América Latina han experimentado en las últimas dos décadas un proceso de expansión de la democracia. La región, al igual que otras áreas del mundo, ha asistido a lo que algunos analistas políticos y académicos han denominado la “tercera ola” democrática. Tras la primera ola expansiva de la democracia, desatada por las revoluciones norteamericana y francesa, y la segunda ola de las primeras décadas del siglo veinte, asistiríamos en las últimas décadas a un visible avance a escala mundial de las instituciones democráticas. La recuperación de la democracia y su posterior

consolidación en varios países de América del Sur durante los años ochenta (Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay), los procesos de pacificación en América Central y el derrumbe del llamado “socialismo real” en los países de Europa del Este hace poco más de diez años abrieron un nuevo cauce en la expansión universal de las ideas y prácticas democráticas.

Si se compara el escenario latinoamericano de las décadas del cuarenta o cincuenta del siglo pasado —cuando sólo dos o tres países podían ser calificados como democráticos, incluso de acuerdo a estándares minimalistas— con el presente, resulta imposible no advertir el avance de las instituciones, los valores y los hábitos de la democracia. Asimismo, es posible apreciar en la región una clara, consistente y auspiciosa tendencia a la consolidación, por una parte, de los instrumentos vigentes en materia de integración política y, por otra, a la construcción de nuevos gobiernos orientados a transformar (en el marco de fuertes restricciones internas) las tendencias ultraliberales provenientes del llamado “Consenso de Washington” hacia orientaciones programáticas de un signo progresista mucho más atentas a responder las demandas de la agenda social en términos generales.

En principio, entonces, más allá de matices, el balance que podemos realizar sobre la evolución política de la región en los últimos años resulta positivo y alentador: en primer lugar, por el retorno a la democracia luego del padecimiento de extendidos regímenes dictatoriales en países de larga tradición democrática como Chile y

Uruguay; en segundo término, por la consolidación de la vida democrática en sistemas políticos de indiscutible gravitación continental como Argentina y Brasil, desde la superación de inestabilidades profundas y con el signo siempre alentador de rotaciones no traumáticas en el gobierno en el caso del segundo; en tercer lugar, por la incorporación al círculo democrático de otras sociedades que a lo largo del siglo veinte vivieron siempre o casi siempre bajo regímenes autoritarios; finalmente, por la revitalización en unos casos o creación en otros de espacios de integración política regional o subregional, con una búsqueda acrecida para superar sus rasgos de “déficit democrático”.

Desde luego, cuando afirmamos que la democracia ha ganado terreno en la región en los últimos decenios, nos referimos al avance de la democracia representativa, es decir, del sistema político en el que los ciudadanos eligen libremente a sus representantes (Poder Ejecutivo y parlamentarios) en elecciones competitivas. Resulta prácticamente imposible concebir la democracia en las sociedades contemporáneas (con millones de electores) sin la presencia de los partidos políticos, es decir, sin organizaciones estables —constituidas en torno a ideales políticos, programas de gobierno y legítimos intereses sociales— que buscan alcanzar el poder a través de procesos electorales. De hecho, las democracias más estables y desarrolladas del mundo, las que han logrado en mayor medida proteger los derechos humanos (civiles, políticos y sociales, por ejemplo, el acceso a la educación, la salud

y el bienestar), suelen ser las que cuentan con partidos políticos sólidos, respaldados por la ciudadanía.

Ahora bien, si resulta prácticamente imposible concebir la democracia en la actualidad sin partidos políticos y otras organizaciones intermedias (sindicatos, movimientos sociales, movimientos indígenas, cámaras empresariales, organizaciones feministas, organizaciones no gubernamentales etc.), también es cierto que la vida democrática se ve enriquecida cuando existen canales fluidos y operativos de participación ciudadana, canalizados ya sea a través de los diversos institutos de democracia directa clásicos (plebiscitos, referéndum), hasta distintas instancias —formales e informales— de participación local o comunitaria.

Sin desconocer o minimizar el auspicioso avance de la democracia representativa en el continente, también se han podido registrar algunas señales inquietantes en el panorama político regional. Las profundas crisis políticas e institucionales que algunos países de la región han padecido en los últimos años dan cuenta de la necesidad de vigilar en forma permanente el estado de salud de nuestras democracias, así como de construir y acordar instrumentos jurídicos de orden supranacional que permitan prevenir estas rupturas, garantizar el respeto de los derechos humanos desde una perspectiva integral y proteger, al mismo tiempo, la soberanía de los Estados y el derecho a la autodeterminación de los pueblos. Por otro lado, los sondeos o encuestas de opinión pública, como veremos más adelante, dan cuenta de una situación

preocupante: en muchos países, una porción significativa de la ciudadanía vacila en la credibilidad que le otorga a las instituciones democráticas, no se siente representada por los partidos políticos y evalúa críticamente el desempeño de los gobiernos e instituciones públicas (el Poder Ejecutivo, el Parlamento, el sistema judicial y los gobiernos locales).⁸

Cabe destacar también que el avance de la democracia en el continente no ha permitido garantizar el respeto por los derechos humanos, en particular de las mujeres, los sectores más pobres y las minorías (los pueblos indígenas, los afrodescendientes etc.). Seguramente, una de las principales asignaturas pendientes de la democracia es la persistencia de altos niveles de pobreza, desigualdad económica y carencias en términos de desarrollo humano (desnutrición, falta de acceso a la salud y baja calidad e inequidad educativa), que han generado la circunstancia lamentable de que América Latina se haya convertido en estas últimas dos décadas en el continente más desigual del planeta. El derecho de los pueblos a la democracia también requiere de modo ineludible avances y consolidaciones efectivas en estos campos, de cara a la exigencia de millones de latinoamericanos que no pueden esperar.

A esta enumeración de deudas (como diría el filósofo político y jurista italiano Norberto Bobbio, “promesas incumplidas”) que las democracias de la región aún no

⁸ Fuente: www.latinobarometro.org.

han saldado con sus pueblos, habría que adosar también algunos déficits de carácter político e institucional, a los que, por otra parte, no escapan tampoco las sociedades más desarrolladas: nos referimos, por ejemplo, a la persistencia de fenómenos de corrupción política y a la frecuente falta de transparencia en los aparatos estatales.

Como es bien sabido, la región en su conjunto y la mayoría de sus países por separado exhiben las peores puntuaciones, en perspectiva comparada con otras áreas del mundo, en los índices que se aplican para medir la corrupción. Por otra parte, la generalización de una cultura de corrupción afecta al funcionamiento de la economía, en tanto los agentes económicos requieren parámetros claros, reglas inequívocas y estables para operar (invertir, producir y comerciar) en el mercado, con niveles mínimos de previsibilidad. Finalmente, la corrupción política y, más en general, la falta de respeto por la legalidad vigente ambientan la aparición de la violencia social, lo que termina alimentando un círculo vicioso de inestabilidad y fragilidad democrática. Y todo ello termina afectando la vigencia efectiva de los derechos humanos, no sólo de los civiles y políticos sino en particular de los económicos, sociales y culturales.

Si, como se ha señalado, la expansión de la democracia en el continente constituye un signo alentador de los tiempos que corren, el panorama político más actual no está pues libre de señales preocupantes y, en algunos casos, auténticamente alarmantes. Las diversas crisis que han atravesado varios países de la región en los últimos

años, los avances aún insuficientes en materia social, los fenómenos de corrupción y la inseguridad física que afecta a importantes segmentos de la población en las grandes metrópolis y en las áreas rurales, los cuadros de polarización política y social, la dificultad en algunos casos creciente por vislumbrar y concretar un futuro mejor para nuestros países en lo que hace a su inserción competitiva en los nuevos contextos internacionales, la persistencia de países con evidentes síntomas de “malestar” con la política dibujan un escenario en el que la afirmación de la democracia resulta una tarea de primer orden, faena por otra parte inacabada e inacabable.

En el informe del PNUD del 2004 titulado *La democracia en América Latina*, entre otros datos extraordinariamente preocupantes, resulta imposible omitir la mención de algunos: “en el año 2003, vivían en la pobreza 225 millones de latinoamericanos, es decir el 43,9%, de los cuales 100 millones eran indigentes (19,4%)”; “El 10% más rico de la población percibe 30 veces el ingreso del más pobre”, lo que convertía a América Latina en el continente más desigual del planeta. Por su parte, en el citado informe también se mencionaba esta tendencia de opinión pública:

En 2002 el 57% de las ciudadanas y los ciudadanos de América Latina prefería la democracia respecto a cualquier otro régimen. Sin embargo, de los que dicen preferir la democracia a otros regímenes, un 48,1% prefiere el desarrollo económico a la democracia y un 44,9% apoyaría un gobierno autoritario si éste resolviera los problemas económicos de su país. (PNUD

Encuesta, elaboración propia con base en Latinobarómetro, 2002.)⁹

Estos últimos registros y datos han mejorado en el último lustro pero la recuperación, como vimos, por lo menos se “desacelerará” tras el impacto de la crisis global. Ello justifica la preocupación sobre la realidad política de las democracias contemporáneas del continente.

La complejidad y el sentido paradójico de ciertas tendencias políticas “nuevas” en el nuevo siglo

No por casualidad es posible apreciar, particularmente en la región sudamericana, una tendencia a la consolidación, por una parte, de varias experiencias en materia de integración política y económico-comercial, en cierto modo postuladas como alternativas ante los avasallamientos del formato unipolar y hegemónico de la globalización “realmente existente” de la última década del siglo XX. Por otro lado, se advierte el advenimiento creciente de nuevos gobiernos orientados a transformar (en el marco de restricciones internas y externas) las tendencias ultraliberales provenientes del llamado “Consenso de Washington”, dominantes como fuente inspiradora de las políticas desplegadas en la región en los años 90, para dirigirse hacia orientaciones más heterodoxas en materia

9 PNUD, *La democracia en América Latina. Hacia una democracia de ciudadanas y ciudadanos*, Buenos Aires, PNUD, 2004, 288p. Ver también PNUD, *La democracia en América Latina. Hacia una democracia de ciudadanas y ciudadanos. Contribuciones para el debate*, Buenos Aires, PNUD, 2004.

de políticas sociales,¹⁰ en algunos casos con líneas programáticas de un signo “progresista”, en otros con evoluciones inciertas de estilo más o menos “populista”.¹¹

Como se verá, todos estos procesos (que más de un autor ha calificado como propios de una “transición postneoliberal”) tienen lugar en el marco de un amplio espectro de propuestas que no permiten una caracterización homogénea. Adviértanse, por ejemplo, las diferencias entre las estrategias desplegadas por los gobiernos de Brasil, Chile (mientras gobernaron los cuatro presidentes de la Concertación) y Uruguay, por una parte, con las impulsadas por Bolivia, Ecuador o Venezuela, por el otro, con situaciones intermedias o erráticas como las de Argentina o Paraguay. La frecuente asimilación de estos ocho gobiernos sudamericanos de “*nuevo tipo*” con una orientación genérica “progresista” o de izquierda no puede en verdad ocultar el signo diverso de las políticas concretas de estos gobiernos en muchos planos, lo que

10 La heterodoxia que apareció en las políticas sociales no se ha visto casi en el campo de las políticas macroeconómicas. La mayoría de los nuevos gobiernos “progresistas” no variaron casi las políticas que en ese campo heredaron de sus antecesores.

11 El concepto de “populismo” suele utilizarse con mucha confusión y equívoco y con frecuente intencionalidad política descalificadora en relación con los procesos políticos latinoamericanos contemporáneos. Para precisar mejor los límites y alcances de la categoría, cfr. María Moira Mackinnon y Mario Alberto Petrone (comp.), *Populismo y neopopulismo en América Latina. El problema de la Centista*, Buenos Aires, EUDEBA, 1999; y Francisco Panizza (comp.), *El populismo como espejo de la democracia*, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2009.

no obsta para registrar también algunas convergencias. ¿El peso de estas últimas fundamenta la mención de un “giro a la izquierda” en el subcontinente? Esta calificación resulta al menos discutible y exige una problematización conceptual.¹²

Más allá de estas diferencias o matices en las políticas aplicadas, lo que sí existe en la región es un signo general de *cambio político en la fragmentación*. Este proceso histórico se abrió en América del Sur con el advenimiento de gobiernos como los de Lula en Brasil (desde el 2002), los dos presididos en forma secuencial por Néstor Kirchner (2003-2007) y por Cristina Fernández de Kirchner (iniciado a fines del 2007 hasta 2011) en Argentina, la apertura de un cuarto “*turno*” de la experiencia de la Concertación Democrática en Chile bajo la presidencia de Bachelet desde el 2005 (ciclo ahora interrumpido, como vimos, por el triunfo de Piñera), las oportunidades abiertas en el Uruguay a través de la victoria en primera vuelta en el 2004 de la izquierda unida en el Frente Amplio con el presidente Tabaré Vázquez (desde marzo del 2005), el triunfo también en primera vuelta del Movimiento al Socialismo (MAS) bajo el liderazgo

12 Sobre el particular, cfr.: José Natanson, *La nueva izquierda. Triunfos y derrotas de los gobiernos de Argentina, Brasil, Bolivia, Venezuela, Chile, Uruguay y Ecuador*, Buenos Aires, Sudamericana, 2008; Emir Sader, *El nuevo topo. Los caminos de la izquierda latinoamericana*, Buenos Aires, Siglo Veintiuno-CLACSO, 2009; entre otras publicaciones recientes.

y la presidencia del dirigente indígena Evo Morales en Bolivia (desde el 2005), el gobierno del presidente Rafael Correa en Ecuador (desde 2006) y el más reciente de Fernando Lugo en Paraguay, que asumió el 15 de agosto de 2008 el gobierno de ese país luego de más de 61 años de hegemonía ininterrumpida del P. Colorado. También, pese a sus giros de perfil controvertido y autoritario, la experiencia de gobierno de Hugo Chávez en Venezuela (a lo largo de más de una década, iniciada en 1999), refiere un continente que parece virar política e ideológicamente, siempre claro está, dentro de los márgenes estrechos de un contexto internacional que ha sido favorable en ciertos aspectos en los últimos años, pero que en la actualidad parece volverse más incierto y amenazante.

Resulta importante advertir que en el bienio 2009-2011, precisamente en el período de mayor impacto previsible de la crisis global, se abrió en el continente un profuso ciclo de elecciones que puede variar de manera sustantiva el mapa político sudamericano y también latinoamericano. No resulta sostenible el fundamentar la irreversibilidad del cambio del signo ideológico de los gobiernos antes mencionados o su segura continuidad en los próximos años. En muchos de estos países, los procesos electorales se despliegan dentro de contextos de fuerte incertidumbre. Esta se da hasta en el caso de gobiernos populares y en buena medida exitosos al final de su mandato (como fue el caso de Uruguay, en el que finalmente ganó en segunda vuelta el candidato oficialista

José Mujica en la segunda vuelta de noviembre de 2009, o como son los casos de Chile, en el que el derechista Sebastián Piñera finalmente se impuso en el balotaje de enero del 2010, y Brasil, donde el también opositor José Serra forzó finalmente un balotaje frente a Dilma Rousseff, pese a la avasallante popularidad de Lula), en los que no es seguro tampoco que los partidos de gobierno triunfen de manera incontrastable en las elecciones siguientes, encajados en el impulso oficialista y continuista en relación a sus predecesores.

Las consecuencias persistentes del agotamiento de las "democracias limitadas" de los noventa

En algunas de estas experiencias, no en todas, y esto configura un profundo desafío para las concepciones *progresistas* en la región, los nuevos gobiernos —desde su diversidad— han incorporado como uno de los ejes de su labor el tópico de la profundización democrática. Aunque de muy diversas formas y con contenidos disímiles, los gobiernos actuales de Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, por ejemplo, resultan ejemplos orientados —por cierto que bajo la polémica de sus respectivas oposiciones— a incorporar demandas en esa dirección. El caso de la conflictiva Bolivia puede despertar discusiones en este punto, aunque, a nuestro juicio, el gobierno de Evo Morales, más allá de errores y excesos, encarna una propuesta genuina y profunda de profundización democrática, desde la defensa y promoción de los derechos de la mayoría indígena, ancestralmente

marginada y explotada en ese país.¹³ En cambio, también desde una perspectiva también opinable, en la Argentina de los Kirchner y en la experiencia interesante y controvertida del Ecuador de Correa, sobreviven dudas severas respecto a este punto, mientras que, sobre todo en la Venezuela de Chávez, este aspecto constituye uno de los *talones de Aquiles* de estas experiencias, con signos evidentes de un estilo confrontativo, con una sociedad

13 Con esta mención, no se busca omitir o invisibilizar la conflictividad fuerte que ha caracterizado la coyuntura política boliviana de estos últimos años, en especial durante buena parte de la trayectoria de la Constituyente, cuyo proyecto resultó finalmente aprobado. Sin embargo, si se profundiza en la perspectiva histórica de esa sociedad mayoritariamente indígena, en el legado ancestral de la marginación política y social de esas poblaciones, en la estructura tradicionalmente injusta de esta nación andina, sin duda que pueden entenderse mejor y compartirse muchas de las propuestas de “*reinversión democrática*” impulsadas por el actual gobierno del MAS, presidido por Evo Morales. Asimismo, el conflicto entre ese intento y las aspiraciones autonomistas (¿secesionistas?) lideradas por las provincias poderosas de Santa Cruz y Tarija parece inevitable. Lo que debe esperarse (y ayudarse desde la acción de política exterior de los Estados sudamericanos, como sucedió con la reciente intervención de UNASUR) es que estas controversias puedan tramitarse en paz, sin esa violencia institucionalizada que tanto daño ha hecho a Bolivia en el pasado. La aplastante victoria de Evo Morales en los comicios del 6 de diciembre de 2009 configura un espaldarazo decisivo del electorado boliviano al proyecto de “*revolución democrática*” impulsado por el MAS. Los años venideros serán fundamentales para evaluar la consistencia y profundidad de esos cambios, así como el signo inequívoco de su proclamada orientación democrática.

muy polarizada y con falta de consensos básicos para la credibilidad de las instituciones democráticas.

Debe advertirse de todos modos que los problemas políticos en estos países no empezaron con sus actuales gobiernos. Este señalamiento acerca de la fragilidad de la democracia venezolana, por ejemplo, advertido incluso por sectores y grupos de izquierda de ese país, debe necesariamente complementarse por el registro del descaecimiento político e institucional que precedió el advenimiento de Chávez al poder, a lo que debe sumarse el reconocimiento de actitudes de deslealtad institucional manifiesta por parte de varios de los partidos y sectores de la oposición, a menudo estimulados abiertamente por el gobierno norteamericano. Por su parte, la Colombia de Alvaro Uribe y de su sucesor Juan Manuel Santos, así como el Perú de Alan García, aún con signos ideológicos similares, tampoco proyectan situaciones de solidez inquestionable en términos de cohesión democrática. Claro está que, en un contexto de confrontación que heredaron, los últimos gobiernos colombianos no han podido mejorar en forma efectiva la grave situación de violación a los derechos humanos en su país (lo que, entre otras cosas, ha empantanado la aprobación en el Congreso norteamericano del TLC ya firmado) y ha terminado en una situación de cierto aislamiento en el continente, tanto en sus contenciosos con sus vecinos como en su proyecto de instalación de bases con militares norteamericanos, iniciativa que ha despertado casi unánimes recelos en la

región. Por su parte, el gobierno de García no ha logrado capitalizar políticamente los éxitos económicos del impulso previsible de los primeros momentos de aplicación del TLC con los EEUU, al tiempo que su creciente impopularidad (que se ha acrecentado tras el impacto de la crisis global) y la conflictiva situación social peruana marcan fuertes dudas sobre el signo de la evolución política futura de ese país.

En este marco, en la última década han podido registrarse algunas señales más generales en el panorama político regional de América del Sur. Las profundas crisis políticas e institucionales que algunos países de la región han padecido en estos años dan cuenta de muchos fenómenos ya inocultables. Advirtamos algunos de ellos:

i) *Los formatos democráticos clásicos y sus actores tradicionales han deteriorado su legitimidad en varios países de la región y hoy presentan —en mayor o menor medida según los casos— insuficiencias claras para consolidar democracias nuevas y arraigadas en el continente.* Al tiempo que varios sistemas de partidos se han desplomado y han sido sustituidos por formaciones radicalmente nuevas (Venezuela, Bolivia, Ecuador), otros se revelan sumamente débiles o de rumbo incierto (Argentina, Perú, Colombia), mientras que en varias sociedades del continente emergen nuevos actores sociales y políticos de signo contestatario, en gran medida como rebelión inorgánica frente a las “democracias limitadas y de baja intensidad” de los años noventa. Como se ha

anotado, en mucho de esos casos, las innovaciones políticas han encontrado su legitimación popular en tanto apuestas de renovación o profundización democrática, orientadas a incorporar la participación de grandes franjas de la población, desplazadas históricamente del ejercicio efectivo de la ciudadanía, del “derecho a tener derechos”, como antes se ha señalado. En muchos casos, estos fenómenos novedosos se expresan a través de modalidades y liderazgos renovadores, en procura de dar voz a los “invisibles” ancestrales de los regímenes anteriores (indígenas, pobres, negros, mujeres, sectores marginados en general etc.) y a exigir el cumplimiento largamente postergado de sus legítimas demandas de justicia y de vigencia de derechos, tanto en materia política, económica, social como cultural. En otros casos, en cambio, se reitera el histórico *síndrome* latinoamericano de los liderazgos mesiánicos, con culto a la personalidad e identificación personalista del régimen.

ii) *En la última década, un antinorteamericanismo profundo (entendido no como una ruptura frente al pueblo y a las instituciones de esa nación sino como un rechazo profundo a las prácticas contrarias al Derecho y a la Comunidad internacionales adoptadas en especial por la administración ultraderechista del presidente Bush [h] en sus ocho años de mandato) se expandió en las sociedades del continente como hacía décadas no ocurría, impulsando nuevamente posturas de corte nacionalista y popular, a partir de discursos que hacían énfasis en la defensa*

de soberanías que se percibían agredidas y desconsideradas. Es esta una tendencia que emerge consistente a nivel de la opinión pública de los países del continente, más allá de las estrategias y actitudes más diversas que sobre este particular han expresado los presidentes. En este sentido, resulta muy contrastante el desempeño de mandatarios como Lula, Bachelet o Vázquez en relación a lo ocurrido con los ejemplos de Chávez, Correa o Evo Morales.

Con el triunfo del demócrata Barack Obama en las elecciones norteamericanas del 4 de noviembre del 2008, resultado en general muy bien recibido en la región, se abrió un margen de expectativas a propósito de cambios positivos en el relacionamiento de los países sudamericanos con los EEUU. Este sentimiento resultó fortalecido en los primeros meses del nuevo gobierno, por ejemplo, tras el discurso de Obama en la Cumbre de Trinidad y Tobago y a partir de algunas iniciativas graduales de cambio en las políticas frente al tema Cuba o en la crisis de Honduras. Sin embargo, esta expectativa ha decaído en forma ostensible en los últimos meses, ante acciones como la instalación de bases militares con efectivos norteamericanos en Colombia, ante su inoperancia en acelerar los cambios hacia el continente, así como también ante sus fracasos en concretar su declarado rumbo multilateralista (ostensibles, por ejemplo, en su pobre desempeño en la Cumbre de Copenhague).

De todos modos, las políticas tradicionalmente proteccionistas de los demócratas, con seguridad reforzadas

por el actual contexto de crisis financiera internacional, no auguran transformaciones radicales en el plano de acuerdos comerciales genuinos entre EEUU y los países sudamericanos, ni siquiera en el formato de los TLCs clásicos, cargados de agenda “OMC plus” y fuertemente condicionantes de los modelos de desarrollo.

iii) *El consenso acrítico imperante en los noventa sobre las bondades poco menos que indiscutibles del retentario liberal ortodoxo, emanado de los organismos financieros internacionales, cada vez genera más críticas y rebeldías, incrementadas aún más luego del estallido de la actual crisis financiera internacional, con las múltiples evidencias que ha dejado respecto a las consecuencias negativas del dogmatismo desregulador del “capitalismo sin reglas y sin miedo” de las últimas décadas.*

Más allá de la fuerza y profundidad extendidas de estas visiones críticas, también debe advertirse que muchas de estas posturas resultan más consistentes desde los discursos de oposición y resistencia que en los contenidos mismos de las políticas implementadas desde el ejercicio del gobierno.

En este sentido, resulta notorio que las alternativas presentadas por los gobiernos latinoamericanos antes referidos resultan —según los casos— más o menos sólidas y defendibles en términos de cambio efectivo o, en algunas experiencias, bastante retóricas y poco viables. Parece poco discutible el señalamiento sobre que los actuales contextos de crisis internacional constituyen

—en especial para los gobiernos que invocan la bandera del cambio social— una coyuntura muy desafiante para aquilatar la consistencia efectiva de sus propuestas transformadoras, en especial en relación a políticas económicas y a modelos de desarrollo genuinamente alternativos, que no sólo logren éxitos en abatir la pobreza sino que también generen procesos arraigados de redistribución efectiva del ingreso. Como vimos, la coyuntura de la crisis global con sus impactos en la región refuerza la radicalidad de este auténtico test acerca de la profundidad del signo alternativo y del sustento efectivo de los modelos de desarrollo anunciados o en cursos de implementación por los gobiernos “progresistas”.

Las claves y posibilidades de este “nuevo orden post-neoliberal” en la región se han traducido, en efecto, en cambios electorales y políticos tan espectaculares como impensables hace algunos años. La profundización del rechazo popular en las sociedades latinoamericanas a la política exterior implementada por la administración Bush entre el 2001 y el 2009, la crítica creciente a las políticas “neoconservadoras” y a sus defensores en el subcontinente, así como la lentitud en los procesos de superación efectiva de los cuadros de pauperización, desigualdad, marginación y concentración del ingreso, constituyeron en efecto factores no únicos pero sí de los más decisivos para explicar el advenimiento de los cambios políticos anotados en la región.

Todos estos fenómenos también resultan factores desafiantes y problematizadores en tanto herencias “malditas”

o contextos muy demandantes para medir los límites y alcances de la gestión de estos nuevos gobiernos de signo más progresista. En suma, los mismos factores que han estimulado su crecimiento electoral y su triunfo en las urnas tienden a interpelar la gestión de estas fuerzas políticas renovadoras, una vez que se transforman en gobierno y tienen que lidiar con realidades muchas veces dramáticas, que exigen transformaciones urgentes y profundas. El impacto de la crisis global en la región profundiza de manera radical estos desafíos aunque, como veremos más adelante, los gobiernos y los presidentes latinoamericanos que ascendieron al poder en los últimos años han gozado de muy altos índices de popularidad.

Es así que la América Latina, que recibe el impacto de la crisis, es un continente que en términos políticos revela profundos cambios que recrudecen la fragmentación y las asimetrías en la perspectiva de sus gobiernos y ciudadanías. También esto se advierte en las concepciones contrastadas que se verifican acerca de los modelos y prácticas concebidas como democráticas y como sustento de una gobernabilidad legítima. Más allá de retóricas, los procesos de reforma o “refundación” de los Estados latinoamericanos tampoco han podido avanzar de acuerdo a los requerimientos planteados, y ello constituye un factor de bloqueo para la adopción de políticas innovadoras y eficaces, en especial en lógicas de promoción del cambio social, sometidas además al impacto restrictivo de la crisis. En ese marco, a partir también de la legítima

presión de sociedades con largas historias de marginación y relanzadas en la última década a nuevas formas de protesta y movilización, no resulta aventurado augurar que es posible que las tensiones políticas aumenten en los países del continente y que esto genere situaciones de inestabilidad y polarización.

Ello no necesariamente debería resultar una preocupación para un proceso de *democratización de la democracia* en América del Sur. Si, como creemos, democracia también significa hoy en el continente reempoderamiento social y político, mayor grado de involucramiento de las ciudadanías, nuevos espacios para la “agencia” (entendida como participación política genuina e idoneidad de los actores para impulsar los cambios), exigencia más radical de un orden fundado en la perspectiva de los derechos humanos, toda propuesta de democratización tiene que aportar formas nuevas de incorporación de los conflictos. En cualquier hipótesis, la consolidación de la gobernabilidad democrática, que ya era un tema central en la agenda del continente previo al impacto de la crisis, no hace más que reforzarse en su centralidad en esta coyuntura. Asimismo, la crisis actual vuelve a confirmar que la estabilidad política y la solidez de las formas de gobierno democrático no son asuntos que los países puedan resolver a cabalidad desde caminos solitarios o aisladamente, refieren también la centralidad renovada de la dimensión de lo regional en toda la coyuntura. En esa perspectiva de análisis, con el foco puesto sobre un proceso

de resignificación democrático que debe consolidarse y profundizarse en un contexto desafiante de crisis internacional, la consideración de las actuales estrategias de inserción internacional de los países sudamericanos puede convertirse también en otro observatorio privilegiado y complementario para el tema que nos ocupa.

4. CRISIS, CAMBIOS POLÍTICOS Y “NUEVAS DEMOCRACIAS” EN EL CONTINENTE

La encrucijada institucional en América del Sur

Desde hace años, venimos insistiendo acerca de que no son pocos en verdad los factores que convergen a la hora de calificar de *encrucijada institucional* el proceso histórico que atraviesan los sistemas políticos latinoamericanos. Pasada la hora de la euforia triunfalista de la ola democratizadora que sucedió a las dictaduras de la “seguridad nacional” y de cara a los desafíos de muchos procesos de cambio político que han suscitado y aun provocan en algunos casos expectativas acrecidas (a menudo desmesuradas) en el seno de las sociedades del continente, a partir de la nueva interpelación abierta por el impacto de la crisis actual en la región, llega la hora de análisis más ponderados, que se hagan cargo —entre otras cosas— de indagar a propósito de este momento de auténtica reconstrucción institucional de nuestras democracias, con su amplio espectro de dilemas y debates en torno a nuevos campos de convicciones y valores que hacen la nuestra convivencia cívica. Los dramáticos

sucesos ocurridos en muchos países latinoamericanos en los últimos años, la alarmante inestabilidad vivida en otros procesos, la persistencia de contextos de crisis social en vastas zonas del continente, las previsible consecuencias políticas de la crisis global etc. constituyen factores que coadyuvan a reafirmar los alcances de nuestro diagnóstico de entrada.

Muchos analistas de la política latinoamericana vienen coincidiendo en los últimos años —aunque desde distintas perspectivas— en este punto de partida. Norbert Lechner, por ejemplo, destacaba hace ya algunos años la compleja simultaneidad que se dio en América Latina entre los procesos de modernización económica (reformas liberales y adaptación a la globalización) y de democratización política (en sus dimensiones de configuración de legitimidad y conducción), procesos que ocurrieron de modo paralelo pero con racionalidades diferentes, lo que dificultó y en algunos casos impidió su compatibilización efectiva. Guillermo O’Donnell, por su parte, ha enfatizado acerca de los peligros del avance del decisionismo (principalmente dentro de los formatos hiperpresidencialistas y personalistas que siguen en boga en la región) y de los procesos de *reacción antipolítica*, que cimentarían en el continente la expansión de “democracias delegativas”, de incierto e inquietante futuro. A su vez, Marcelo Cavarozzi ha planteado la paradoja entre una orientación general en la región de estabilización democrática con deslegitimación de alternativas

militaristas, por un lado, junto con un proceso tendencial de pérdida de sentido de lo que efectivamente hace o puede hacer la política en nuestras sociedades, en el marco del deterioro visible de toda una concepción que él ha llamado “política estadocéntrica”.

Las últimas dos décadas han resultado muy pródigas en contrastes en todo el continente: en los ochenta y en los noventa, al tiempo que caían las dictaduras militares y se producían en varios países experiencias importantes en la perspectiva de una reinstitucionalización democrática, luego de una fase de crecimiento y de transformaciones comenzó a generarse nuevamente una profunda crisis económica y social en la región, con consecuencias muchas veces devastadoras para los partidos gobernantes y aún para el funcionamiento de los sistemas partidarios y políticos en su conjunto. A ello se sumó un aceleramiento de vértigo en las transformaciones en la escena mundial, con efectos por lo general no directamente beneficiosos para los intereses de los países del continente. La refundación democrática en América Latina se desplegaba así a comienzos del siglo XXI en un contexto nutrido de dificultades y desafíos, muchos de los cuales readquieren proyección con la crisis actual y su impacto en la región. Todos estos fenómenos asociados al pasado reciente y a la coyuntura actual de América Latina vuelven a poner en el centro del debate los requerimientos de una reinención de la ciudadanía y de la política en general, con su centro en la necesidad de encontrar un

nuevo eje de vinculación entre la consolidación de las democracias y la profundización de la vigencia de los derechos humanos.

En los últimos años y a contramano del optimismo y de las expectativas generadas por el crecimiento económico y el advenimiento de un giro político novedoso en el continente, se han multiplicado algunas señales preocupantes sobre la “salud” de varios sistemas políticos latinoamericanos, que también se han traducido luego en bloqueos para la acción efectivamente transformadora de distintos gobiernos. Repasemos, a título de inventario indicativo y nada exhaustivo, algunas de esas señales más visibles: han ascendido a cargos de gobierno o a posiciones de expectabilidad política ante la opinión pública figuras sin experiencia política anterior, asociadas con frecuencia a mensajes mesiánicos o providencialistas; los partidos han perdido arraigo y se ven cada vez más desafiados en sus clásicas funciones de representación e intermediación social y política; en algunos casos se desgastan los arbitrajes electorales, mientras que en otros se despliegan formatos de “democracia plebiscitaria” con una sobreabundancia de actos electorales con lógicas crecientes de polarización; varios de los nuevos gobernantes buscan “saltarse” los caminos institucionales para así entablar relaciones más directas y “fluidas” con la opinión pública, confundiendo a esta con la ciudadanía, en el marco de la llamada “sondeo dependencia”; los ciudadanos alternan la apatía con una alta volatilidad de

opinión, aumentando los vaivenes en el valor otorgado al papel de las instituciones más tradicionales; las nuevas exigencias y demandas para la producción de políticas generales no encuentran respuestas adecuadas desde los partidos y el Estado; persisten fenómenos de corrupción, incluso en gobiernos liderados por fuerzas “progresistas” emergentes, lo que hiere en forma profunda las esperanzas populares, ansiosas de instituciones transparentes y de funcionarios honestos a cabalidad; se perfila una increíble escalada armamentista en Sudamérica, con el telón de fondo de “fronteras calientes” y conflictos bilaterales no fácilmente negociables;¹⁴ entre otros muchos similares.

Aunque cabe advertir desde ya que la profundidad de los fenómenos señalados no es igual en toda América Latina y que también podrían reseñarse procesos de signo más auspicioso, sobreviven procesos efectivos de “reacción antipolítica”, con una creciente popularidad en la opinión pública y aún en los círculos de las dirigencias políticas de varios países del continente. Esto último surge con mucha nitidez, observando con cierta atención las estrategias desplegadas por algunas de las figuras “exitosas” de la política latinoamericana de años atrás: el “hacer política en contra de la política” (o, como diría Bourdieu, “la política de la antipolítica”) comienza a ser un rasgo

14 Adviértase la escalada de conflictos bilaterales y fronterizos que en los últimos tiempos se han desatado o han despertado en ALC y en especial en el territorio sudamericano y se podrá ponderar la relevancia efectiva de este tema.

característico de ese nuevo tipo de políticos, generalmente provenientes de los medios de comunicación, de circuitos religiosos o de las propias Fuerzas Armadas, algunos de ellos con trayectorias precedentes que relativizan la honra de su novedad. En contrapartida, también se producen procesos transformadores liderados por figuras que expresan de distintas formas —en casi todos los casos en formatos muy personalizados— los anhelos de sectores tradicionalmente marginados de los campos de decisión, al frente de coaliciones o de partidos de nuevo cuño, bajo el impulso de renovadas formas de movilización popular. En medio de la fragmentación y de las asimetrías que el impacto de la crisis contribuye a amplificar, el contraste histórico de procesos tan antitéticos alcanza un especial relieve.

En nuestra perspectiva de análisis, lo que evidencian todos estos procesos —entre otras cosas— es un contexto de cambio y modificación profunda de la matriz tradicional del “hacer política”, en cuyo centro se destacan los problemas de la redefinición del concepto de democracia, la necesidad de un nuevo enfoque del ejercicio pleno de los derechos humanos desde el prisma exigente de la superación de la pobreza, la emergencia de nuevas dimensiones generales de la “ciudadanía,” de la “comunidad” y de la “productividad política”, de la mano de un pleito renovado en torno a la especialidad del rol de los partidos políticos, de los movimientos sociales y, de manera muy particular, de las intersecciones entre el Estado, el mercado y las “formas” comunitarias. El estudio profundo de

estos temas (y del amplio espectro de cuestiones que cada uno de ellos involucra) amerita y aún exige abordajes de índole diversa: desde profundizaciones teóricas hasta investigaciones de política comparada, pasando por indagatorias más generales (diseñadas por tema o por región) o por análisis de casos que contribuyan a identificar referencias más concretas para interpelar las problemáticas o alternativas globales a ser analizadas.

***Instituciones, confiabilidad y legitimidad:
algunos perfiles a partir de los datos de la
secuencia 1996-2008 del Latinobarómetro***

Si, como tantas veces se ha dicho, no debe confundirse “opinión pública” con “ciudadanía”, la evolución más volátil de la primera a lo largo de un período de tiempo considerable puede derivar en la gradual cristalización de visiones que, de un modo u otro, terminan encarnando en ese nivel más profundo de las ideas y prácticas predominantes en el comportamiento de los ciudadanos. En el contexto contemporáneo de América Latina, en sus *sociedades de la desconfianza* y en sus *ciudadanías del miedo*, el registro de la evolución en el tiempo de variables como la adhesión a los valores y prácticas de la democracia o el de la confiabilidad otorgada a las principales instituciones públicas y privadas, entre otras, se vuelven indicadores relevantes.

También importa sobremanera registrar las primeras señales efectivas de la crisis económica internacional en

los giros de la opinión pública del continente. Para ello hemos decidido separar, por un lado, el análisis de la evolución de algunos indicadores del Latinobarómetro, durante el período 1996-2008, de los registros emanados del *Informe* correspondiente al año 2009, en el que, por primera vez de manera específica, se pueden medir algunos efectos del impacto de la crisis.

En la evolución que presentan las mediciones del Latinobarómetro¹⁵ para el período 1996-2008, abundan constataciones significativas sobre muchos temas importantes en la perspectiva señalada. En lo que tiene que ver con diversos indicadores que refieren a la actitud predominante de los latinoamericanos en torno a los *valores y prácticas asociadas a la vigencia de la democracia*, pueden observarse algunas tendencias preocupantes. Durante ese período bajó promedialmente el grado de adhesión y apoyo al sistema democrático en la región (un 4% menos en 2008 que en 1996). Descendió también la calidad en la evaluación de sus desempeños. De acuerdo a las mediciones del *Informe 2008*, la percepción dominante entre los latinoamericanos (70%) era la de que “se gobierna no para la mayoría sino para los intereses de unos pocos”. Si bien persistían en el continente valoraciones y actitudes positivas hacia la democracia como el mejor sistema político, también decrecían los porcentajes y adquirirían magnitudes de apoyo relativamente altas ciertas versiones de la

15 Cfr. Corporación Latinobarómetro, *Informe 2008*, Santiago de Chile, noviembre de 2008 (banco de datos en línea www.latino-barometro.org).

sabiduría convencional que resultan muy criticables desde un punto de vista más consistentemente democrático.

En segundo término, las mediciones del Latinobarómetro 1996-2008 revelaban la persistencia de una erosión preocupante de las críticas a las formas políticas autoritarias y aun dictatoriales, en contraposición con un desencanto más o menos instalado respecto a las valoraciones sobre la democracia. La *relación democracia vs. autoritarismo-militarismo* arrojaba una evolución sorprendente, en especial si se tienen en cuenta las valoraciones que proyectaban estas comparaciones a la salida de las dictaduras de la seguridad nacional (cotejo sin duda bastante improcedente desde el punto de vista teórico y argumental). Un 53% de los encuestados manifestaba en 2008 que no le importaría el carácter “no democrático” de un gobierno si este resolvía los problemas económicos. Este guarismo debía conceptuarse como grave habida cuenta de que se producía luego de un lustro de continuo y fuerte crecimiento económico, con mejoría general de indicadores sociales y bajo el liderazgo de regímenes democráticos. De todos modos, en el continente permanecían, de acuerdo al Latinobarómetro 2008, otras hipótesis de tolerancia respecto a gobiernos autoritarios y aun militaristas, las sociedades se mostraban más proclives a defender los valores de la seguridad y del orden sobre los de la libertad (tensión histórica que aparece desbalanceada en el continente ante los cuadros de inseguridad y violentismos desatados en los últimos tiempos).

Los *grados de satisfacción o insatisfacción en relación al funcionamiento de las instituciones* revelaban

también contrastes significativos. Un 57% de los encuestados acompañaba la aseveración de que “no puede haber democracia sin Congreso nacional”, al tiempo que un 32% manifestaba confianza en la acción del Parlamento, 5% más que en 1996 pero sobre todo 15% más que en el 2003, cuando se registró el mínimo histórico del período (17%). Sin embargo, si bien un 56% se manifestaba de acuerdo con la idea que “no puede haber democracia sin partidos”, sólo un 30% evaluaba positivamente su trabajo y apenas un 21% expresaba confianza en ellos, apenas un 1% más que en 1996 pero también casi el doble del 2003, año que en el marco de la última crisis y de la recesión se llegó al mínimo de confianza en el período (11%).

En lo que refiere a la *intención o propensión a votar*, es de destacar que no se detectaban en el *Informe 2008* descensos o variaciones preocupantes en cuanto a la expectativa que generan las elecciones en tanto instancia de cambio en el rumbo de los gobiernos y de sus políticas públicas. Si bien el 59% de los encuestados coincidía en que “lo más efectivo para cambiar las cosas es votar”, la población se dividía por mitades en la respuesta sobre si votaría por un partido o no. De todos modos, la participación política por la vía de los partidos y las elecciones superaba muy claramente al reducido porcentaje de los encuestados (16%) que señalaba que “lo más efectivo para cambiar las cosas es participar en movimientos de protesta”.

La pregunta acerca de cuánto podría impactar la crisis (ya vista como inminente en sus impactos sobre el continente en el 2008) en las evaluaciones de los

latinoamericanos sobre la política en general y sobre la visión acerca de la democracia en particular, constituyó uno de los centros de análisis de la “sinóptica política” contenida en el *Informe 2008* y cuya autoría perteneció a Daniel Zovatto, miembro del Consejo Asesor Internacional del Latinobarómetro.¹⁶ A partir del señalamiento sobre la densidad del ciclo electoral 2009-2011 (durante el que se celebrarán 14 elecciones presidenciales en países de la región), Zovatto anticipaba que a diferencia del anterior *rally* electoral del bienio 2005-2006 (del que emergió una buena parte de los nuevos gobiernos de signo progresista en la región), sobre el bienio 2009-2011 habría de pesar a su juicio “*un contexto económico adverso en el cual las presiones sociales serán mucho mayores*”. Luego de proponer que en la agenda de este nutrido cúmulo de contiendas electorales algunos de los principales temas dominantes serían “el papel del Estado y su relación con el mercado”, “la delincuencia” y “la juventud”, resaltaba tres preguntas a las que consideraba fundamentales en el desenlace de la nueva coyuntura: “¿Cómo se comportarán los llamados gobiernos populistas de la región? ¿Aumentarán los problemas de gobernabilidad y de inestabilidad política? ¿Cuál será la tendencia dominante del nuevo mapa político de América Latina?”¹⁷

16 *Ibidem*, p. 69 y ss.

17 *Ibidem*, p. 73.

Con la pauta comparativa del impacto de crisis anteriores, pero advirtiendo el carácter incierto y en muchos aspectos inédito de la nueva crisis global, Zovatto problematizaba en más de una parte de su texto la relación entre las crisis económicas y la democracia. Si bien advertía que habían venido aumentando de manera sostenida en el continente el interés y la participación políticas, que se evidenciaba también un incremento en “la actitud positiva hacia la política” y que el *Informe 2008* del Latinobarómetro mostraba “cómo América Latina está movilizadada como nunca antes”, se mostraba cauteloso a la hora de proponer escenarios probables para los años siguientes:

¿Acaso [se preguntaba en una parte del *Informe*] la nueva crisis que está en curso producirá otro desencanto con las instituciones o se trata de cambios que permanecerán? La diferencia con el período de la crisis asiática es que ahora hay gobiernos de alternancia en el poder que han sido elegidos por mayorías contundentes, presidentes que han sido reelectos por su buena gestión, y altos niveles de aprobación de gobierno en muchos países.¹⁸

Con el telón de fondo de las primeras señales acerca del impacto de la crisis en la región latinoamericana, el análisis de los registros del *Informe 2008* y el seguimiento de algunas de las principales tendencias verificadas en el período 1996-2008 proponían una agenda bien sugerente, en especial de cara al despliegue de los procesos que emergerían en el 2009 y en el 2010. Al registro continuado en el período 1996-2008 de ciertas mediciones preocupantes en relación a tópicos cruciales, como la actitud ante valores

18 *Ibidem*, p. 88.

y prácticas democráticas, su cotejo ante pautas de signo autoritario, los grados de confianza y satisfacción frente al funcionamiento efectivo de las instituciones, el *Informe 2008* del Latinobarómetro anticipaba varios aspectos en torno a la problemática de la intersección entre crisis económica, consolidación democrática y vigencia de los derechos humanos. De cara a la inminencia del *rally* electoral 2009-2011 y ante la evidencia de que la crisis no pasaría de largo en la región pero tampoco tendría los efectos devastadores de otras veces, se dejaba planteada una agenda de temas y preguntas en verdad sugerentes.

Algunas reflexiones iniciales a partir del Informe 2009 del Latinobarómetro

Las expectativas generadas por el *Informe* del año anterior no fueron defraudadas en diciembre del 2009. Los registros y mediciones obtenidos presentaron en efecto algunos ejes de reflexión muy suscitadores. Ya los subtítulos que acompañaron la carátula del *Informe* se encargaron de marcar un rumbo preciso para el análisis:

Informe 2009. La democracia se afianza en tiempos de crisis. La percepción de progreso aumenta a pesar del golpe de Estado en Honduras, el virus AH1N1 y la crisis económica. América Latina aprecia más sus instituciones, sus presidentes, el mercado y está más satisfecha con su democracia. ¿La democracia está madura?¹⁹

19 Corporación Latinobarómetro, *Informe 2009*, banco de datos en línea www.latinbarómetro.org.

La pregunta final, como se advertirá, no era nada retórica y apuntaba a uno de los matices más sustantivos de las mediciones presentadas y de su primer análisis.

El *Informe* tomaba como temas centrales de su indagatoria sobre los giros de la opinión pública latinoamericana en el último año el golpe de Estado en Honduras, las amenazas sobre la estabilidad de la democracia y el registro de indicadores varios en torno a la misma, el impacto de la crisis mundial en lo político-electoral y en lo económico-social, entre otros. En la introducción se adelantaban algunas conclusiones generales que perfilaba el *Informe* en su conjunto:

Las democracias latinoamericanas muestran crisis de representación, en primer lugar a través del hiperpresidencialismo, la fiebre reeleccionista y el desmedro de la confianza en las instituciones, así como la atomización del sistema de partidos en tantos países. (...) La Democracia en América Latina no sufre con la crisis económica como se había esperado. Veremos en este informe como los resultados de la crisis son positivos para la democracia, paradójicamente a pesar de los problemas de “la política”. La actual crisis no es la crisis asiática que encontró a la región pobre y desprevenida. Esta crisis pilla a la región después de 5 años de crecimiento sin precedente, y con una ola de elecciones que había elegido a los gobernantes más populares de los últimos 30 años. Nunca tantos habían estado tan satisfechos con sus gobiernos como en los años 2006, 2007 y 2008. Con todo, la democracia no se consolida porque (...) hay reformas pendientes que no se pueden obviar. Las reformas emprendidas por países como Bolivia, muestran que se avanza en la percepción de democratización cuando las estructuras de la sociedad sufren modificaciones sustantivas que permiten el acceso a las oportunidades, la movilidad social, la igualdad ante la ley. (...) En resumen, a pesar del golpe [de Estado en Honduras] y a pesar de la crisis, América Latina es

más democrática después de la crisis 2009, es más tolerante, es más feliz. Sólo resultados positivos de un año en el cual no hay ningún motivo para celebrar. Las reformas que han tenido lugar en la región están empezando a mostrar sus frutos, ya que sin duda este fortalecimiento de la democracia a pesar de la crisis es un síntoma positivo.²⁰

En cuanto a las mediciones presentadas por el *Informe 2009*, algunas de las más importantes tuvieron que ver con el impacto del golpe de Estado en Honduras. Sobre ese particular, los principales registros fueron los siguientes:

- apenas un 24% de los latinoamericanos se mostró de acuerdo con el golpe, promedio dentro de un rango de opiniones en el que solamente República Dominicana evidenció un nivel alto de aprobación (un 44%), mientras que el resto (incluido Honduras) no superó un tercio de aceptación y en Argentina y Uruguay sólo un 9% de la población consultada lo aprobó;
- un 62% de los habitantes de la región desestimó la probabilidad de un golpe de Estado en sus propios países;
- aumentó a un 65% el conjunto de aquellos que expresaron que bajo ninguna circunstancia apoyarían a un gobierno militar;
- de todos modos, hubo porcentajes minoritarios pero considerables de expresiones de apoyo a actitudes claramente autoritarias (como acordar que “los militares remuevan al presidente si viola la constitu-

²⁰ *Ibidem*, p. 4-5.

ción” o que “cuando hay situación difícil está bien pasar por encima de las leyes”).

En sus conclusiones sobre este punto, el *Informe* registraba el concepto de “Neo Democracias”, adjudicándose a aquellos gobiernos latinoamericanos que a su juicio evidenciaban “grados de autoritarismo”:

La amenaza autoritaria [se señalaba en un fragmento del *Informe*] tiene dos versiones, por una parte están los golpes de Estado, como el caso de Honduras, pero por otra están lo que podríamos llamar “las *Neo Democracias*”, que avanzan lentamente hacia crecientes grados de autoritarismo. Estas se siguen llamando democracias, pero han derivado en un tipo híbrido de régimen político. Tal es el caso de Venezuela, donde importantes elementos de las democracias no están del todo presentes. (...) Las actitudes hacia la democracia en América Latina están inundadas de confusiones autoritarias, donde los ciudadanos combinan cosas que no se pueden combinar si se es democrático. No se puede rechazar a un gobierno militar a todo evento para dar la sensación de que se es democrático y sustituirlo por el poder total del presidente. ¿El autoritarismo presidencial es una forma de *Neo Democracia*, donde a los presidentes se les otorga el poder total, como sustitutos del sistema democrático?²¹

En el registro de las mediciones acerca de distintos tópicos vinculados con la situación de la democracia en América Latina, el *Informe* presenta en la mayoría de los casos indicadores mayoritariamente favorables, aun cuando persiste la interpelación acerca de la densidad y coherencia de lo que los encuestados entienden por democracia. En ese sentido, el 59% manifiesta su apoyo explícito a

21 *Ibidem*, p. 10-5.

la democracia (“la democracia es preferible a cualquiera otra forma de gobierno”), mientras que un 76% lo hace “por descarte-implícito” (“la democracia puede tener problemas, pero es el mejor sistema de gobierno”).²² Por otra parte, un 54% de los encuestados acuerda con la aseveración de que “los gobiernos democráticos están más preparados para enfrentar una crisis económica”,²³ un 46% prefiere la democracia al “desarrollo sin democracia”,²⁴ mientras continúa aumentando la manifestación de satisfacción con la democracia, alcanzándose un 44% (con un sorprendente aumento de 7% respecto al año anterior).²⁵

Frente a estos y otros indicadores mayormente favorables, se presentan otros registros preocupantes. Estos surgen en particular cuando al entrevistado se le pregunta en concreto sobre su acuerdo específico acerca de afirmaciones que hacen a principios democráticos más clásicos (como los ya señalados de necesidad de partidos políticos, apoyo al Parlamento, rechazo a los gobiernos autoritarios, libertad de expresión, realización de elecciones etc.), mientras que los porcentajes aumentan de modo exponencial si se le pregunta acerca de su postura genérica en torno a “la democracia”:

Si se usa un indicador compuesto, donde se incluye la necesidad de partidos políticos, Parlamento, rechazo a los gobiernos autoritarios, apoyo a la democracia por encima de los otros tipos de

22 *Ibidem*, p. 22.

23 *Ibidem*, p. 23.

24 *Ibidem*, p. 29.

25 *Ibidem*, p. 36.

régimen, la cantidad de personas que adhieren a la democracia no alcanza los dos dígitos en América Latina. Si se incluyen en el índice las elecciones, la libertad de expresión, aumentan los porcentajes. Si se buscan categorías más híbridas donde las personas tienen algunas actitudes correctas y otras incorrectas, se puede alcanzar hasta el 40% de la población. Por último, es desalentador saber que alrededor de un 40 a un 45% de la población de la región no logra tener actitudes democráticas en más de dos aspectos como los arriba definidos. (...) Si por el contrario no es el investigador el que “define” lo que tiene que ser democracia sino la gente con sus respuestas, entonces aumenta considerablemente la cantidad de demócratas.²⁶

En lo que se refiere a los impactos de la crisis en la opinión pública y sus valoraciones en torno a la política y la democracia, el *Informe* también registra elementos importantes. A diferencia de lo ocurrido en el 2001, cuando la región se vio afectada por la crisis asiática y ello provocó una baja sensible en los índices de adhesión a la democracia y otros registros conexos, los datos del

26 *Ibidem*, p. 16-7. En el *Informe* se reconocen los problemas teóricos que las ciencias sociales siempre han tenido para una definición consensuada de democracia. A partir de este reconocimiento y de sus fuertes implicaciones en las distintas mediciones, se señala que “los ciudadanos de los países gobernados por la izquierda califican mejor esa democracia (medida en una auto-identificación en una escala de 1 a 10) que los ciudadanos no gobernados por la izquierda”. Ante este registro, los autores del *Informe* concluyen: “Si lo que cada cual está comprendiendo por democracia está contaminado por la ideología y depende de la orientación del gobernante, entonces no es el funcionamiento de las instituciones lo que cuenta, ni los procedimientos o las normas, sino más bien la posición de los gobernantes” (cfr. *ibidem*, p. 16).

Informe 2009 no confirman esa correspondencia ni permiten registrar un impacto negativo como consecuencia del primer despliegue de la crisis:

Lo cierto es [según señala el *Informe*] que el apoyo a la democracia supera en el año 2009 lo obtenido en el año 2006 (58%), alcanzando un 59%. El año 2006 fue el punto más alto de crecimiento económico que América Latina ha tenido en los últimos 40 años. En efecto, el apoyo a la democracia, que baja a 54% en el año 2007, viene subiendo desde entonces a 57% en el 2008 para llegar al 59% en el año 2009. Es decir, el apoyo aumenta más en el año de decrecimiento económico, negándose la hipótesis de que el vaivén de la economía tiene impacto sobre el apoyo a la democracia. (...) Los latinoamericanos muestran con sus respuestas que el año 2008 fue menos bueno que el año 2009, al mismo tiempo que acusan la crisis, denostando los problemas económicos y las desigualdades. No se trata entonces de una miopía o de una ilusión, sino más bien de consideración de otros aspectos en la evaluación del tipo de régimen.²⁷

Este marco de análisis aparece ratificado en otras mediciones: la afirmación acerca de que “*en general el sistema económico funciona bien*” en una democracia aumenta su nivel de acuerdo de un 50% en el 2003 a un 62% en el 2009; en los únicos dos países sudamericanos en los que creció el PBI en el 2009, Perú y Uruguay, se verifican sin embargo las posiciones más contrastantes en cuanto al porcentaje de satisfacción con la democracia, 22% y 79%, respectivamente. En otro pasaje del *Informe*, los analistas infieren que

los Presidentes son los grandes ganadores de esta crisis, ya que no sólo aumenta su valoración política como gobernantes, sino

²⁷ *Ibidem*, p. 18.

que también logran mejorar la percepción de la democracia en sus países. Esta crisis produce, por el contrario de lo esperado, efectos políticos positivos sobre el régimen democrático y los gobiernos. (...) No se produce alternancia de la izquierda a la derecha o viceversa por motivos económicos de la crisis como se suponía en un principio que podía suceder. Muy por el contrario, los cambios en los gobiernos no han sido por esa causa, sino por otras que tienen que ver con la situación (política más que económica) interna de cada país.²⁸

En su análisis específico titulado “Sinóptica política-electoral: la ola de elecciones 2009-2011”, inserto en el *Informe*, Daniel Zovatto, al igual que en el *Informe* del año anterior, explora acerca de las posibles consecuencias del impacto de la crisis en los resultados del calendario electoral del bienio. Algunas de las principales tendencias que registra son las siguientes: reafirma su convicción sobre que el “giro a la izquierda” en la región es más “supuesto” que real; destaca que los impactos político electorales de la crisis no resultan homogéneos ni muchas veces previsibles; no advierte “la posibilidad de una reconfiguración radical del escenario político de la región”, ya que, si bien “las crisis económicas (...) benefician a la oposición, el gobierno puede mantenerse en el poder cuando tiene la habilidad y los recursos (sobre todo para llevar a cabo políticas anticíclicas) y transformar la crisis económica en oportunidad política”; finalmente, destaca al reeleccionismo como la “tendencia que viene cobrando cada vez mayor

28 *Ibidem*, p. 83.

fuerza”, lo que a su juicio no constituye “una buena noticia para la calidad de la democracia en nuestra región”.²⁹

Como se advierte, los vínculos e interrelaciones entre el impacto de la crisis económica internacional y la evolución de los procesos políticos, al menos en la percepción de la opinión pública predominante en América Latina, resultan mucho más complejos de lo esperado. No parece haber mucho espacio para determinismos economicistas, mientras que la densidad y las posibilidades de incidencia de la política emergen como muy ampliados.

La pregunta acerca de cómo entienden la democracia los latinoamericanos genera más de una perplejidad y muchas interrogantes. Entre hiperpresidencialismo y “fiebre reeleccionista”, parece consolidarse un distanciamiento creciente —ya presente desde varios años atrás— entre las ideas clásicas de la teoría democrática liberal y el ambiente político-intelectual que parece estar definiendo las visiones y los usos que sobre la idea general de democracia tienden a prevalecer en la opinión pública de los latinoamericanos. Como señala Zovatto, “la continuidad democrática no ha estado en riesgo”, a pesar de que “determinados países han visto aumentar la polarización, la conflictividad social y las tensiones políticas”, mientras que “las instituciones mejoran mucho menos que los presidentes”.³⁰ Los recientes acontecimientos en Ecuador no hacen sino profundizar las incertidumbres.

29 *Ibidem*, p. 58-9.

30 *Ibidem*.

A la luz de los acontecimientos recientes, el impacto histórico de lo sucedido con el golpe de Estado en Honduras puede configurar con el tiempo un punto de inflexión. Nada asegura que así sea, pero nadie puede descartar ese escenario tan grave del retorno de crisis institucionales a América Latina. Aunque la decidida respuesta de la UNASUR ante los hechos ecuatorianos tuvo un resultado inmediato y muy alentador, la preocupación institucional se ha instalado con más fuerza en el continente latinoamericano. Es sin duda un dato en sí muy desalentador que esto se dé en el año 2010.

En suma, el principal impacto político de la crisis económica parece ser la mayor visibilización de procesos de cambio que ya estaban instalados desde bastante tiempo atrás en la región. Con muchas incertidumbres y escasas previsibilidades, por lo menos hasta ahora ese parece ser el panorama que también viene a confirmarse en las mediciones de opinión pública en la región.

5. ¿DEMOCRACIAS "INCIERTAS" O "DIFERENTES"?

CIUDADANÍA Y NUEVAS FORMAS POLÍTICAS: EL "TEST" DE LA CRISIS DE CARA AL PRÓXIMO CICLO ELECTORAL

Los países de América Latina en general y de América del Sur en particular han experimentado en las últimas dos décadas un proceso de expansión de la democracia. La región, al igual que otras áreas del mundo, asiste a lo que algunos analistas políticos y académicos han

denominado la “tercera ola” democrática. Tras la primera ola expansiva de la democracia, desatada por las revoluciones norteamericana y francesa, y la segunda ola de las primeras décadas del siglo XX, asistiríamos en las últimas décadas a un visible avance a escala mundial de las instituciones democráticas. Sin embargo, la actualidad de esta “tercera ola” democrática en el continente, con el agregado del impacto de la crisis global en curso, presenta —como hemos tratado de probar— desafíos inéditos y en algunos casos de dimensión histórica.

En toda esta coyuntura que converge en el ciclo electoral 2009-2011 se juega también otro “pleito” político de primera importancia para buena parte de los países latinoamericanos, que hace referencia a la evaluación de los cambios y transformaciones que pueden verificarse en ese nivel más profundo de las prácticas y modelos de ciudadanía predominantes, y en la reconceptualización democrática que ese tipo de procesos siempre comporta. En el marco de un “cambio de época” en el que en el mundo y en la región se producen mutaciones muy fuertes en el campo de la política, tanto en relación a su quehacer concreto como a sus dimensiones más teóricas y propiamente ideológicas, el foco orientado al registro de las nuevas formas del ejercicio de la ciudadanía se vuelve un observatorio privilegiado para medir los indicios y las evidencias de transformaciones en múltiples campos de la convivencia cívica. En esa dirección, nuestra hipótesis de trabajo es la de que el impacto de la crisis global sobre la evolución del próximo ciclo electoral 2009-2011, en América Latina y el

Caribe en general y en América del Sur en particular, puede configurar un valioso “test” para explorar los límites y los alcances del proceso histórico de cambio de las formas políticas que atraviesa la política latinoamericana en este comienzo del siglo XXI. En ese marco de análisis, el cruce efectivo entre democracia y vigencia de los derechos humanos deviene un tema especialmente relevante. Y, en ello, el prisma interpelante de la pobreza, consolidado tras un contexto de crisis global, se presenta como de consideración ineludible.

Pese a la marcada diversidad de sus sociedades y de sus sistemas políticos, pese a las múltiples fragmentaciones y asimetrías que presenta en la actualidad, a la mayoría de los países latinoamericanos les resulta muy difícil sentirse ajenos a los fenómenos enfatizados por autores como Isidoro Cheresky en lo que refiere al registro de profundas transformaciones políticas en ALC.³¹ Aunque con sus tiempos y sus maneras, en las distintas sociedades del continente también se producen fenómenos que refieren a procesos de cambio profundo identificados con temas y enunciados como los siguientes: la emergencia de “democracias diferentes” y de “ciudadanías

31 Cfr. entre otros textos de este autor: Isidoro Cheresky (comp.), *La política después de los partidos*, Buenos Aires, Prometeo Libros, 2006; Isidoro Cheresky (comp.), *Ciudadanía, sociedad civil y participación política*, Buenos Aires, Miño y Dávila editores, 2006; Isidoro Cheresky (comp.), *Elecciones presidenciales y giro político en América Latina*, Buenos Aires, Ediciones Manantial, 2007; Isidoro Cheresky, *Poder presidencial, opinión pública y exclusión social*, Buenos Aires, CLACSO-Manantial, 2008.

atomizadas y constantes”, en las que se vislumbra una suerte de “estallido de oportunidades” para nuevos formatos de acción política, para la constitución de “identidades no plenamente constituidas”, para la emergencia de “espacios públicos no presos de tramas de institucionalización”; tras el debilitamiento y la desagregación de los partidos tradicionales, irrumpe con fuerza la controversia en torno a los “partidos de nuevo cuño”, con modalidades organizacionales y pautas de interacción diferentes con otros actores (movimientos sociales, redes de opinión etc.); las elecciones replantean su significación “como promotoras de constitución de escenas con inducción de identidades”; el fenómeno de los liderazgos fuertes no sólo supone la profundización de procesos de “personalización de la política” sino que hace a esta última mucho más permeable y hasta vulnerable a “fenómenos de popularidad”, de duración y de solidez muy diversas; en medio de procesos de creciente “subjetivación de la política”, el peso de los medios de comunicación se amplifica en la vida cívica dentro de redes de sociabilidad “más espontáneas y menos institucionalizadas”; se replantean perspectivas muy renovadoras en lo que refiere a la medición y el monitoreo de la vigencia de los derechos humanos;³² entre otros que podrían citarse.³³

32 Cfr., sobre este particular, IIDH, *Los derechos humanos desde la dimensión de la pobreza. Una ruta por construir en el sistema interamericano*, San José de Costa Rica, ASDI-DANIDANMFA, 2007, 72p.

33 Cfr. cita 49.

En ese contexto, autores como Evelina Dagnino, Alberto J. Olvera y Aldo Panfichi, entre otros, han desarrollado en trabajos recientes la idea de la expansión en el continente de formas de “representación contenciosa”, fundamentalmente sociales y no políticas, episódicas y reiteradas, afincadas más en lo local y proyectadas a menudo a través de movilizaciones fuertemente personalizadas. Los conflictos sociales que tenderían a expresar estas formas de “representación contenciosa” proyectan, por lo general, demandas específicas sin alternativas globales ni inserciones claras en “proyectos alternativos”.³⁴

Aunque resulta también difícil no advertir ciertas resistencias y sobrevivencias de las viejas matrices nacionales todavía influyentes en cada cultura política, ya no resulta persuasivo ni fundamentable en términos empíricos la visión de procesos políticos casi incomparables en su pluralidad, sólo inteligibles desde abordajes nacionales y casuísticos. Tampoco se trata por cierto de postular un nuevo intento —*a priori* infértil— de homogeneizar la visión y caracterización de un proceso político abarcativo de todo el continente latinoamericano, tampoco viable en relación al subcontinente sudamericano. El marco general de la crisis global y de su impacto, así como la

34 Cfr. Evelina Dagnino, Alberto J. Olvera y Aldo Panfichi, “Innovación democrática en América Latina: una primera mirada al proyecto democrático-participativo”, en Cisma Raventós (comp.), *Innovación democrática en el Sur. Participación y representación en Asia, África y América Latina*, Buenos Aires, CLACSO, 2009, p. 31 y ss.

convergencia de ciertos procesos de cambio político que la precedieron y que pese a sus diferencias participan de un ciclo común, permite una lectura legítima sobre una inflexión histórica en la trayectoria de las democracias latinoamericanas.

En estos nuevos contextos de cambio político en el continente, el impacto de la crisis global y las formas de respuesta de la región ante la misma, como se ha señalado, pueden configurar un escenario especialmente propicio para la dilucidación de varios ejes de reflexión e interpretación de fuerte centralidad. Desde el campo más estrictamente político, la lista de asuntos sometidos a debate es muy amplia: la resignificación de las teorías y prácticas de la ciudadanía; la transformación de los usos públicos del concepto democracia; la rediscusión del rol del Estado, los partidos y los movimientos sociales; el papel de los liderazgos; los nuevos enfoques para reformular una teoría de los derechos humanos desde la asunción plena de la centralidad del eje de la pobreza; hasta una reedición del clásico tópico en América Latina de la “disputa constitucional del régimen”, en el marco de los procesos de refundación institucional ya referidos; entre otros. Por su parte, desde el campo más netamente social, las cuestiones no son de menor complejidad: la reformulación de los actores; las nuevas formas de empoderamiento social; su entrecruzamiento con las políticas sociales; la emergencia de formas diferentes de constitución de identidades sociales; el debate en torno a los

límites y alcances del “espacio público”; las claves novedosas de la representación, participación y agregación de grupos de interés; los límites y alcances de la vigencia de los derechos económicos, sociales y culturales etc.

En suma, dentro de esos contextos inciertos que proyecta el impacto de la crisis en la región, las preguntas radicales que nutren la interpelación política más actual en la mayoría de los países latinoamericanos comienzan a sintonizar con la idea de un momento de inflexión conceptual en el cruce entre ciudadanía y democracia. ¿Qué partidos? ¿Qué sistema de partidos? ¿Qué tipo de liderazgos? ¿Qué nuevos espacios de participación? ¿Qué tipo de comunicación política es la prioritaria? ¿Qué forma de representación resulta dominante? ¿Qué agenda? ¿Qué forma efectiva de gobierno? ¿Qué régimen político? ¿Qué ciudadano? ¿Qué democracia? ¿Qué derechos? En suma, si preguntas tan radicales como estas dos últimas comienzan a resonar como no tan exóticas ni tan lejanas de la experiencia cívica cotidiana de los latinoamericanos, parece bastante evidente que algo muy profundo también se está moviendo en estos campos en el continente. Y por cierto que no se trata de acudir como otrora a “adjetivos” cambiantes para salvar “sustantivos” sospechados. Mucho menos se trata de restaurar la infausta tradición de concebir sólo instrumentalmente a estos últimos. Luego del estallido de las desmesuradas expectativas de las transiciones, un cierto agnosticismo cívico fue imponiéndose gradualmente en el centro de

las escenas políticas latinoamericanas, de la mano de la consolidación de democracias limitadas, “sin república” o con “poca república”. Todo esto supone repensar radicalmente las relaciones entre democracia y derechos humanos desde el prisma interpelante de la pobreza, el fenómeno más interpelante de la realidad latinoamericana de las últimas décadas, renovado en su interpelación por el impacto de la crisis global en curso. Si realmente se quiere superar la incertidumbre y buscar genuinamente “democracias diferentes” a la altura de estos tiempos, habrá que bucear con profundidad en torno a estos temas. Si así ocurre, el desafío de la crisis puede en efecto configurarse en una oportunidad.

OTRA BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA ADEMÁS DE LA CITADA

ALCÁNTARA, Manuel; CRESPO, Ismael (1995). *Los límites de la consolidación democrática en América Latina*. Salamanca, Ediciones Universidad Salamanca.

——— (2008). “Nuevas formas de inestabilidad política”. *América Latina Hoy. Revista de Ciencias Sociales*, v. 49, agosto. Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca.

- ALVAREZ, Carlos, comp. (2003). *La Argentina de Kirchner y el Brasil de Lula*. Buenos Aires, CEPES-CEDEC-Prometeo.
- AROCENA, Rodrigo y CAETANO, Gerardo, coord. (2007). *Uruguay: agenda 2020. Tendencias, conjeturas, proyectos*. Montevideo, Taurus.
- BECK, Ulrich (1998). *¿Qué es la globalización? Falacias del globalismo, respuestas a la globalización*. Buenos Aires, Ed. Paidós.
- BOSOER, Fabián y Calle, Fabián, comp. (2007). *2010: una agenda para la región*. Buenos Aires, TAEDA.
- BOUZAS, Roberto, coord. (2002). *Realidades nacionales comparadas. Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay*. Buenos Aires, Altamira-Fundación OSDE.
- BREWER-CARIAS, A. R. (2001). *Reflexiones sobre el constitucionalismo en América*. Caracas, Editorial Jurídica.
- CAETANO, Gerardo (2005). “Desde la transición democrática hasta el triunfo de la izquierda (1985-2005)”. En CAETANO, Gerardo (dir.). *20 años de democracia. Uruguay 1985-2005. Visiones múltiples*. Montevideo, Taurus.
- (2007). “Distancias críticas entre ciudadanía e instituciones. Desafíos y transformaciones en las democracias de la América Latina contemporánea”. En ANSALDI, Waldo (dir.). *La democracia en América Latina, un barco a la deriva*. Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica de la Argentina, p. 177-99.
- (2008). “El cambio en la fragmentación. América Latina y su panorama político: una visión global”. En ELIZONDO, José Rodríguez y CASANUEVA, Héctor (ed.). *¿Qué pasa en América Latina? Realidad política y económica de nuestra región*. Santiago de Chile, Ed. Andrés Bello.
- CALAMÉ, Pierre et. al. (2001). *Con el Estado en el corazón. El andamiaje de la gobernancia*. Montevideo, Editora Vozes-Ediciones Trilce.

- CAVAROZZI, Marcelo y Medina, Juan Abal (h), comp. (2002). *El asedio a la política. Los partidos latinoamericanos en la era neoliberal*. Buenos Aires, Homo Sapiens.
- CEPAL (2009). *Estudio económico de América Latina y el Caribe (2008-2009)*. Santiago de Chile, Naciones Unidas.
- (2009). *Panorama de la inserción internacional de América Latina y el Caribe (2008-2009)*. Santiago de Chile, Naciones Unidas.
- (2009). *Panorama social de América Latina 2008*. Santiago de Chile, CEPAL.
- CEPAL, IPEA, PNUD (2003). *Hacia el objetivo del Milenio: Reducir la pobreza en América Latina y el Caribe*. Santiago de Chile.
- CESARÍN, Sergio y MONETA, Carlos, comp. (2005). *China y América Latina. Nuevos enfoques sobre cooperación y desarrollo. ¿Hacia una nueva ruta de la seda?* Buenos Aires, BID-INTAL.
- COMISIÓN STIGLITZ (2009). *Report of Experts of the President of the UN General Assembly on Reforms of the International Monetary and Financial System*. Nueva York, ONU, junio.
- COSTA LIMA, MARCOS (2008). *Dinâmica do capitalismo pós-Guerra fria. Cultura tecnológica, espaço e desenvolvimento*. São Paulo, Ed. UNESP.
- DAHL, Robert (1989). *Democracy and its Critics*, New Haven, Yale University Press.
- DECLARACIÓN DEL CLUB DE MADRID (2009). *Las dimensiones políticas de la crisis económica mundial: una visión latinoamericana*. Santiago de Chile (www.clubmadrid.org).
- DOMÍNGUEZ, José Mauricio (2009). *La modernidad contemporánea en América Latina*. Buenos Aires, Siglo Veintiuno-CLACSO.
- EVANS, Peter (1996). “El Estado como problema y como solución”. *Desarrollo Económico*, v. 35, n. 140, enero-marzo.
- (1997). “The eclipse of the state? Reflections on State-ness in an Era of Globalization”. *World Politics*, v. 50, n. 1, October.

- FAO — ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACIÓN (2009). *Síntesis sobre el hambre*.
- FERNÁNDEZ, Nelson (2008). *¡Maldita crisis! Claves de los ciclos financieros; el origen de la crisis mundial 2008 y su impacto en Uruguay*. Montevideo, Fin de Siglo.
- FONDO MONETARIO INTERNACIONAL — FMI (2009). *Perspectivas de la Economía Mundial*. Abril.
- FRENCH-DAVIS, Ricardo (2005). *Reformas para América Latina: después del fundamentalismo liberal*. Buenos Aires, Siglo XXI-CEPAL.
- GARCÍA LINERA, Álvaro (2009). *Forma valor y forma comunidad*. La Paz, CLACSO-Muela del Diablo editores-Comuna.
- GARRETÓN, Manuel Antonio (2000). *Política y sociedad entre dos épocas. América Latina en el cambio del siglo*. Rosario, Homo Sapiens.
- GUTMAN, Margarita y COHEN, Michael. comp. (2007). *América Latina en marcha. La transición postneoliberal*. Buenos Aires, Ediciones Infinito-OLA.
- HELD, David (1997). *La democracia y el orden global. Del Estado moderno al gobierno cosmopolita*. Barcelona, Paidós.
- HUNTINGTON, Samuel (1991). *The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century*. Norman, University of Oklahoma Press.
- INSTITUTO DE CIENCIA POLÍTICA (2009). *Encrucijada 2010. La política uruguaya a prueba*. Montevideo, Fin de Siglo-CLACSO.
- JARA, Alejandro; MONTERO, Ramón; y TOVAR, Camilo E. (2009). *The Global Crisis and Latin American: Financial Impact and Policy Response*. En *BIS, Quarterly Review*, 6/2009.
- KLIKSBERG, Bernardo (1999). “Capital social y cultura: claves olvidadas del desarrollo”. *Documento de Trabajo*, BID.
- (2009). “El impacto de la crisis económica en la gobernabilidad democrática”. Ponencia presentada en el Foro de Gobernabilidad Democrática, PNUD, 26 de octubre.

- KYMLICKA, Will (1990). *Contemporary Political Philosophy*. Oxford, Clarendon Press.
- LECHNER, Norbert (2006). *Obras escogidas I*. Santiago de Chile, Lom Ediciones.
- LÓPEZ, Ernesto y MAINWARING, Scott, comp. (2000). *Democracia: discusiones y nuevas aproximaciones*. Buenos Aires, UNQ.
- LUPPI, Carlos (2009). *La crisis del "capitalismo salvaje". ¿Qué nos enseñó y cómo es el mundo que viene?* Montevideo, Editorial Veritatis.
- MAINWARING, Scott y SHUGART, Matthew Soberg, comp. (1997). *Presidentialism and Democracy in Latin American*. Cambridge, Cambridge University Press.
- MANIN, Bernard (1998). *Los principios del gobierno representativo*. Madrid, Alianza.
- MONIZ BANDEIRA, Luiz Alberto (2004). *Argentina, Brasil y Estados Unidos. De la Triple Alianza al MERCOSUR*. Buenos Aires, Norma.
- NUEVA SOCIEDAD, 219 (2009). *La integración fragmentada*. Caracas, Nueva Sociedad, enero-febrero.
- O'DONNELL, Guillermo (2007). *Disonancias. Críticas democráticas a la democracia*. Buenos Aires, Prometeo.
- O'DONNELL, Guillermo; IAZZETTA, Osvaldo; y CULLELL, Jorge Vargas, comp. (2003). *Democracia, desarrollo humano y ciudadanía. Reflexiones sobre la calidad de la democracia en América Latina*. Rosario, PNUD-Homo Sapiens Ediciones.
- OCDE (2009). *Perspectivas económicas de América Latina 2009*. París, Centro de Desarrollo de la OCDE.
- OEA, SECRETARÍA DE ASUNTOS POLÍTICOS (2009). *La crisis económica global: efectos y estrategias políticas*. Washington, OEA (www.oas.org).
- OIT (2009). *Tendencias mundiales del empleo 2009*. Ginebra, OIT (www.ilo.org)

- ONU (2009). *World Economic Situation and Prospects 2009, Update as of Mid-2009*. Nueva York, Naciones Unidas (www.un.org).
- PASQUINO, Gianfranco (2004). *Sistemas políticos comparados*. Buenos Aires, Prometeo-Bononiae Libris.
- PNUD (2004). *La democracia en América Latina. Hacia una democracia de ciudadanos y ciudadanas*. Buenos Aires, PNUD-TAURUS.
- PODESTÀ, Bruno; GALÁN, Manuel Gómez; JACOME, Francine; y GRANDI, Jorge, coords. (2000). *Ciudadanía y mundialización. La sociedad civil ante la integración regional*. Madrid, CEFIR-CIDEAL-INVESEP.
- PUTNAM, Robert (1993). “The Prosperous Community”. *The American Prospect*, v. 4, n. 13.
- QUIROGA, Yesko; CANZANI, Agustín; INSIGNIA, Jaime, comp. (2009). *Consenso progresista. Las políticas sociales de los gobiernos progresistas del Cono Sur*. Montevideo, Fundación Ebert.
- REGUEIRO BELLO, Lourdes María (2008). *Los TLC en la perspectiva de la acumulación estadounidense. Visiones desde el MERCOSUR y el ALBA*. Buenos Aires, CEA-CLACSO.
- SADER, Emir y JINKINGS, Yvana (2006). *Enciclopédia Contemporânea da América Latina e do Caribe*. São Paulo, Boitempo Editores.
- SEGIB (2009). *América Latina ante la crisis financiera internacional*. Montevideo, SEGIB.
- SEGRERA, Lopez y FILMUS, Daniel, comp. (2000). *América Latina 2020. Escenarios, alternativas, estrategias*. Buenos Aires, UNESCO-FLACSO-Temas Grupo Editorial.
- SEN, Amartya (2000). *Desarrollo y libertad*. Barcelona, Editorial Planeta.
- SOLANA, Javier (2003). “Multilateralismo eficaz: una estrategia para la Unión Europea”. *Política Exterior*, n. 95, p. 37-46.

- SOSNOWSKI, Saúl y PATIÑO, Roxana (1999). *Una cultura para la democracia en América Latina*. México, UNESCO-FCE.
- SOTILLO, José; AYLLÓN, Bruno, editores (2006). *América Latina en construcción. Sociedad política, economía y relaciones internacionales*. Madrid, Ed. Catarata-UCM.
- SVAMPA, Maristella (2009). *Cambio de época. Movimientos sociales y poder político*. Siglo Veintiuno-CLACSO.
- WATCH, Social (2006). *El derecho a no ser pobre. La pobreza como violación de los derechos humanos*. Montevideo, Instituto del Tercer Mundo.

Asimismo se han consultados publicaciones, informes y contenidos de páginas web de múltiples instituciones como IIDH, OEA, ONU, FAO, FMI, Banco Mundial, BID, UNESCO, PNUD, CEPAL, Transparency Internacional, Freedom House, MERCOSUR, ALADI, UNION EUROPEA, UNCTAD, OMC, IBGE, Latinobarómetro, Instituto Real Elcano y de Eurolat-Celare, entre otras.